



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



Tesis

**El criterio probatorio en la investigación preparatoria frente a la garantía
de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal**

Autor

Bach. Carlos Gonzales, Saul Alberto

Asesor

Mag. Pérez Ramírez, Marco Antonio

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 17 de febrero del 2023

LAMBAYEQUE, 2023

Tesis denominada “El criterio probatorio en la investigación preparatoria
frente a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal”,
presentada para optar el Título Profesional De Abogado, por:



Bach. Carlos Gonzales, Saúl Alberto
AUTOR



Mag. Pérez Ramírez, Marco Antonio
ASESOR

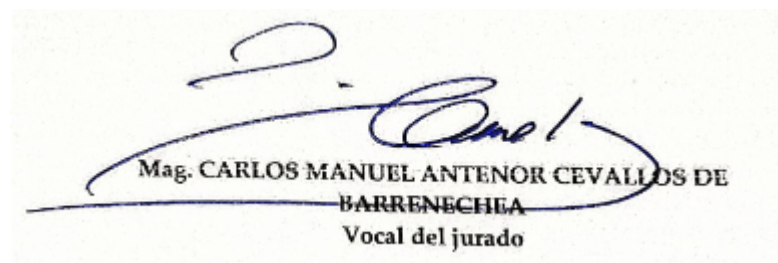
Aprobado por:



Abog. CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS
Presidente del Jurado



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado



Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

Dedicatoria

Dedico la presente tesis a Dios todo Poderoso por darme salud y la vida para poder superarme cada día ;

En memoria de Dionicio Neón Carlos Rojas ,mi padre, quien fue mi principal fuente de apoyo y que en todo momento estuvo junto a mí durante mi formación personal y profesional,

A mi hermosa madre María Martha que en todo momento está junto a mí, encaminándome por el buen camino y demostrándome su amor y ternura. ¡Te amo mucho madre !

A mi esposa Erika y a mi Princesa Antonella Geraldine, quienes me reconfortan cada día para seguir adelante.

A mis hermanos, Carmita, Tonny Indira, Fiorella y Guianella, que siempre se han tomado su valioso tiempo para apoyarme con sus consejos y moralmente siempre alentándome a conseguir mis metas.

A mis amigos quienes estuvieron presentes en todo momento brindándome su incondicional apoyo y ánimos.

Agradecimiento

Agradezco a **Dios** por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han creído en mí siempre, dándome ejemplo de superación, humildad y sacrificio; enseñándome a valorar todo lo que tengo; porque han fomentado en mí el deseo de superación y de triunfo en la vida. Lo que ha contribuido a la consecución de este logro. espero contar siempre con su valioso e incondicional apoyo.

Índice

Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento.....	iv
Índice.....	v
Índice de tablas	viii
Índice de ilustraciones.....	ix
Índice de anexos.....	x
Resumen.....	xi
Abstract.....	xii
Introducción	13
Capítulo I	17
Los aspectos metodológicos de la investigación	17
1.1. El planteamiento del Problema	17
1.2. Formulación del Problema.....	20
1.3. Justificación e Importancia del Estudio	20
1.3.1. Justificación del Estudio.....	20
1.3.2. Importancia del Estudio	22
1.4. Objetivos.....	22
1.4.1. Objetivo General	22
1.4.2. Objetivos Específicos.....	22
1.5. Hipótesis	23

1.6. Variables	23
1.6.1. Variable Independiente	23
1.6.2. Variable Dependiente	23
1.7. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección	23
1.7.1. Métodos	23
1.7.1.1. Método Exegético Jurídico.....	24
1.7.1.2. Sobre la aplicación del método sistemático jurídico	24
1.7.1.3. Método Hipotético Deductivo.....	25
CAPÍTULO II	27
El principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal.....	27
2.1. Antecedentes del problema.	28
2.2. El principio de tutela jurisdiccional efectiva	29
2.3. La tutela jurisdiccional efectiva en el derecho penal	32
CAPÍTULO III.....	36
La estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal.	36
3.1. El esquema probatorio en la investigación penal.....	36
3.2. Criterio probatorio del Juez y el Fiscal	42
Capítulo IV.....	46
Análisis y resultados	46
4.1. De los resultados del análisis estadístico	46

4.2. De los resultados de la opinión de expertos.....	48
Capítulo V	66
Contrastación de la hipótesis	66
5.1. Discusión	66
5.1.1. Sobre el contenido del objetivo: “Desarrollar teóricamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal”	67
5.1.2. Sobre el contenido del objetivo: “Estudiar la estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal”	73
5.1.3. Sobre el contenido del objetivo: “Analizar el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para contrastar con el principio de tutela jurisdiccional efectiva”	77
5.2. La Validación de las variables	81
5.2.1. Sobre la variable independiente: “El criterio probatorio en la investigación preparatoria”	81
5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal”.....	81
5.3. La contrastación de la hipótesis	84
Conclusiones	87
Recomendaciones	89
Bibliografía	90
Anexos N° 1.....	95

Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 1”.....	48
Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 2”.....	51
Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 3”.....	54
Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 4”.....	57
Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.....	60
Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 6”.....	63

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 1”.
..... 49

Ilustración 2: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 2”.
..... 52

Ilustración 3: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 3”.
..... 55

Ilustración 4: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 4”.
..... 58

Ilustración 5: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.
..... 61

Ilustración 6: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.
..... 64

Índice de anexos

!Especificación de carácter no válida

Anexo 2: Solicitud enviada a la oficina de información judicial del Distrito Judicial de Lambayeque.	98
---	----

Resumen

La investigación desarrollada se plasma en este trabajo que muestra el interés por determinar si el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria resulta jurídicamente apropiado para asegurar una adecuada protección para quienes participan en un proceso de investigación a fin de acceder efectivamente al sistema de justicia que controla el Estado. Observación que se realiza de manera detallada en función a los estándares probatorios que existen como parámetros establecidos en el desarrollo de la investigación penal, lo cual se ha realizado en base a la intervención del método que ha permitido observar adecuadamente la situación real del problema y también el ejercicio de interpretación realizada sobre la estructura normativa en función a una exégesis y la interpretación sistemática.

El resultado de dicha evaluación ha dado como resultado la verificación de criterios de corroboración probatoria que se encuentran ausentes en el desarrollo de la investigación, en tanto que las decisiones adoptadas carecen de motivación suficiente que permita observar este tipo de inferencias que determinen probabilidad suficiente para concebir como válidos los elementos probatorios, lo cual propicia un bajo nivel de seguridad jurídica en lo que respecta al desarrollo de la investigación preparatoria como el peldaño previo a la formalización, de allí su importancia para lograr estandarización de los criterios indicados. Es en función a estas determinaciones que la investigación termina por determinar que, a fin de solucionar la ausencia de estos criterios como parte de la motivación de las decisiones jurisdiccionales, deba establecerse un lineamiento de criterios mediante un acuerdo jurisdiccional que permita estandarizar las corroboraciones que lleven a inferir la certeza sobre los hechos delictivos en función a la probabilidad suficiente.

Palabras Claves: Criterio probatorio, Investigación preparatoria, Tutela jurisdiccional efectiva, Proceso penal.

Abstract

The research developed is reflected in this work that shows the interest in determining whether the evidentiary criteria developed in the preparatory investigation is legally appropriate to ensure the guarantee of effective jurisdictional protection in criminal proceedings. Observation that is carried out in detail according to the evidentiary standards that exist as parameters established in the development of the criminal investigation, which has been carried out based on the intervention of the method of observation of reality and the interpretation of the rules based on exegesis and systematic interpretation.

The result of said evaluation has resulted in the verification of evidentiary corroboration criteria that are absent in the development of the investigation, while the decisions adopted lack sufficient motivation to allow observing this type of inferences that determine sufficient probability to conceive. as valid the evidentiary elements, which favors a low level of legal certainty regarding the development of the preparatory investigation as the step prior to the formalization, hence its importance to achieve standardization of the indicated criteria. It is based on these determinations that the investigation ends up determining that, in order to solve the absence of these criteria as part of the motivation of the jurisdictional decisions, a guideline of criteria must be established through a jurisdictional agreement that allows standardizing the corroborations that take to infer certainty about criminal acts based on sufficient probability.

Keywords: Evidence criteria, Preparatory investigation, Effective jurisdictional protection, Criminal process.

Introducción

Esta tesis que lleva por título “El criterio probatorio en la investigación preparatoria frente a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal”, se ha inspirado en la observación de ciertas características presentes en la ejecución de los procedimientos que forman parte de las investigaciones en el ámbito penal, en los cuales para lo concerniente a su momento de investigación preparatoria muestra una ejecución probatoria o de corroboración de las pruebas o los indicios que resulta insuficiente en tanto carece de criterios estandarizados que conlleven a un sentido adecuado de lo referente a la percepción de los hechos vinculados con lo ilícito, desde una perspectiva jurídica, ello con el fin de establecer la justificación para aplicar sanciones.

Esta perspectiva es lo que permitió construir un espacio de diseño metodológico en el capítulo primero de la investigación en el que se incorpora la formulación del problema bajo el cuestionamiento de ¿Qué tan apropiado resulta el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para asegurar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal? Dicha pregunta ha tenido como respuesta a priori la hipótesis inicial que se configuró de la siguiente manera: Si, se verifica que el criterio probatorio en la investigación preparatoria es inadecuado; entonces, ello está vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

Además de ello se ha podido establecer en dicho espacio de la investigación aquellas tareas o metas que se trazaron inicialmente para el desarrollo de la investigación, siendo en primer lugar el objetivo general que señala: Determinar si el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria resulta jurídicamente apropiado para asegurar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal. De igual modo se tiene como parte de la estructura metodológica las metas secundarias u objetivos específicos que dicen: Desarrollar teóricamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal; Estudiar la estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal; Analizar el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para contrastar con el principio de tutela jurisdiccional efectiva.

Es en función a estas tareas que se ha desarrollado el contenido de la investigación, así en el capítulo segundo se incorporan fuentes teóricas que se ocupan de la teoría de la tutela jurisdiccional para verificar su eficacia y efectividad en el desarrollo de las investigaciones penales, en las que se procura establecer o reconocer los factores que pueden conllevar a la responsabilidad penal de un sujeto y desde luego los derechos fundamentales que le corresponde al Estado proteger ante la inminente intervención del ius puniendi.

En seguida se parecía en el tercero de los capítulos, la verificación de elementos doctrinarios relacionados con la fundamentación teórica vinculada con la prueba, en principio genéricamente observado y luego para reconocer su

tratamiento en el ámbito del desarrollo de las investigaciones penales marcadas por un proceso, sobre todo en función a los criterios de corroboración de su valor en miras al establecimiento de un criterio apropiado y certero sobre la condición de responsable que le puede ser atribuida a un determinado sujeto, precisándose para ello arribar a la concepción de inferencias determinantes bajo probabilidades de certeza.

Además de ello en el capítulo cuarto se ha desarrollado el análisis de la realidad en tanto que se presenta como un problema el hecho de la ausencia de corroboración probatoria en la motivación de razones destinadas a la certeza del hecho delictivo y su vínculo con el agente, así como también se ha tenido en consideración la opinión de los operadores jurídicos que respaldan las posturas esgrimidas en esta investigación.

Por último, se ha tenido la síntesis de los resultados en el capítulo quinto que se refiere las fases de análisis que conllevaron a contrastar la respuesta a priori que se generó con la investigación, lo cual ha servido de base para establecer un discurso crítico sobre la temática planteada por este trabajo académico en función a sus metas, pasando por los antecedentes o trabajos previos de la investigación para luego en función a ello establecer las tomas de postura respectivas. Dicha elucubración ha permitido sintetizar en función a tales resultados, la validación de cada una de las variables, con lo cual se han creado nuevas inferencias que unidas

llevaron a la determinación final de la tesis, con lo cual se han construido las conclusiones y recomendaciones del caso.

El autor.

Capítulo I

Los aspectos metodológicos de la investigación

1.1. El planteamiento del Problema

El interés por el tema de esta investigación se inspira en la verificación de nulidades a nivel casatorio respecto a la determinación de razón de que los elementos de convicción, que se entiende son generados en base de las pruebas valoradas, al no ser advertidos por el defensor de la legalidad, ni por el Juez de Investigación Preparatoria, son valorados como prueba preconstituida, e incluso ratificada por la instancia superior; deviniendo su nulidad por decisión del Poder Judicial, circunstancia que permite advertir un problema de criterio de aplicación de las reglas procesales referidas al tratamiento de la prueba a nivel de la investigación preparatoria.

Según lo indicado anteriormente ha de tenerse en cuenta que la formalización de la investigación preparatoria tiene un parámetro específico establecido en el artículo 336 del ordenamiento procesal penal peruano, en el cual se indica que puede llegarse a dicho nivel en tanto se reconozca de manera reveladora la realización de una acción delictiva, desde luego basándose también en la revisión de los plazos de prescripción de la acción, el reconocimiento de manera individual a quien se le imputa la acción, además de la condición de procedencia jurídica correspondiente a la forma de intervenir que tiene el Estado en ejercicio de su acción punitiva.

Teniendo en cuenta todo ello según lo indicado por el investigador Espinoza (2019) quien desarrollo la investigación titulada “El estándar de prueba en el proceso penal peruano”, donde refiere en base a la jurisprudencia que: “(...) el estándar de la prueba que se requiere es de la sospecha reveladora. La formalización de la investigación preparatoria es el grado intermedio de sospecha y se requiere contar con hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta delictiva, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación”. (p. 91)

Precisamente la condición que se explica como requerimiento para que se pueda establecer la determinación específica o el argumento jurídico válido para generar convicción respecto a la responsabilidad de la comisión de un delito, es aquello que se advierte como la razón que orienta la necesidad de evaluar este tipo de criterio, además del que se emite durante el desarrollo de la investigación preparatoria en virtud del reconocimiento de los indicios probatorios, para lo cual ha de considerarse como apropiada la revisión de la condición probatoria para continuar la investigación en la siguiente fase.

A este nivel es importante indicar que existe un nivel de condición o estándar probatorio exigido que se puede considerar adecuado para el establecimiento de la investigación preparatoria, pero será preciso revisar las circunstancias en las que se desarrolla esta actividad procesal que desde luego está a cargo del Ministerio Público, en la misma que debe asumirse que se deben realizar

las verificaciones necesarias y suficientes para alcanzar el siguiente estándar de prueba que servirá para la acusación o no del imputado.

En ese sentido debe señalarse que el desarrollo de esta fase procesal de acuerdo a la verificación de la realidad se observa con mucha lentitud poca eficiencia afectando la estructura principista relacionada con el cumplimiento de los plazos y el decurso de la investigación en la menor cantidad de actos, los mismos que se supone procuran un desarrollo adecuado del proceso; esta situación conduce al razonamiento de que ante el vencimiento del plazo sin la debida diligencia y frente al control de plazos y acusación, la actividad probatoria no se desarrolla de manera suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que el estándar probatorio que se requiere par la acusación no es tan alto en el sentido de que se precisa que: “(...) en la acusación se está ante un grado relativamente más sólido de la sospecha: se exige sospecha suficiente (...)”. (Espinoza, 2019, p. 100)

Tal cual como se ha descrito, el problema que se reconoce en el desarrollo de los estándares probatorios desarrollados en el proceso penal con especial atención de la investigación preparatoria, deberían ser analizados y revisados con cautela puesto que tales niveles no se aprecian como suficiente exigencia para el ejercicio de la actividad probatoria durante esta etapa, lo cual conllevaría a la acusación sin un nivel adecuado de certeza que se reflejaría de manera indubitable en la valoración de la prueba en el desarrollo del juicio oral y trasladado así a la sentencia. Por lo tanto, se advierten efectos negativos sobre el derecho a ser

atendido efectivamente a través de la jurisdicción que corresponda, en tanto que las garantías no estarían siendo cubiertas de manera total para asegurar un proceso justo y equitativo en la determinación de la responsabilidad penal.

Por lo mismo que ante la advertencia de esta vulneración se presume la existencia de un problema sobre las condiciones garantistas que operan ante la necesidad de efectivizar las condiciones de acceso a la justicia en el ámbito jurisdiccional ante una situación penal, siendo esta verificación la que ha de ocupar el sentido de la tesis proyectada, procurando con ello la creación de propuestas alternativas para la exigencia de los parámetros que establece el Código y son inaplicadas por los magistrados.

1.2. Formulación del Problema

¿Qué tan apropiado resulta el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para asegurar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal?

1.3. Justificación e Importancia del Estudio

1.3.1. Justificación del Estudio

Se ubica como factor justificante que opera sobre el desarrollo de esta proyección se reconoce en el ámbito jurídico social, toda vez que el ámbito de protección que permite acceder con efectividad ante aquella protección jurisdiccional ofrecida por la estructura estatal en el ámbito de justicia, lo cual

plantea condiciones garantistas, lo cual supuestamente debe otorgar el criterio probatorio asumido por los magistrados para la evaluación de los medios que permitan alcanzar una correcta convicción sobre los hechos conducente a la determinación de la responsabilidad penal; por todo ello se puede encontrar relación directa con la seguridad jurídica que se deriva de la necesidad social que se supone el Estado debe cumplir, a través de los mecanismos jurídicos y político criminales necesarios.

De otro lado se advierte una justificación teórica para el desarrollo de esta actividad académica, toda vez que se reconoce en la doctrina jurídica a los estándares probatorios como elementos de guía para el desarrollo de la actividad procesal, sobre todo dada la importancia de los derechos que se ponen en riesgo mediante la posibilidad de imputar responsabilidad penal que pesaría sobre cierta persona por haber ejecutado acciones que van contra el sistema de reglas que impone el derecho penal, puesto que tal tutela jurisdiccional efectiva como teoría sugiere que sea un tratamiento equitativo en base a la protección de los principios garantistas del derecho penal, sobre todo el de presunción de inocencia lo que requiere de la exigencia de un estándar probatorio más alto debido a que la libertad como derecho fundamental implica su máxima protección hasta no tener la certeza indubitable de corresponde la intervención del Estado para aplicar una sanción.

1.3.2. Importancia del Estudio

Resulta importante esta proyección, toda vez que el ejercicio de observación que se propicia sobre las circunstancias presentes en el ámbito penal vendrá acompañada del reconocimiento de los factores que la están provocando, permitiendo con ellos formar el argumento que se pretende lanzar como propuesta para mejorar el criterio utilizado para la actividad probatoria en los juzgados de investigación preparatoria, con lo cual se tendrá un efecto de beneficio respecto a los intereses ciudadanos, en tanto favorecerá el sentido jurídico de la seguridad, lo cual debe otorgar un adecuado sistema penal.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Determinar si el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria resulta jurídicamente apropiado para asegurar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar teóricamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal.
- Estudiar la estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal.
- Analizar el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para contrastar con el principio de tutela jurisdiccional efectiva.

1.5. Hipótesis

Si, se verifica que el criterio probatorio en la investigación preparatoria es inadecuado; entonces, ello está vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

1.6. Variables

1.6.1. Variable Independiente

El criterio probatorio en la investigación preparatoria.

1.6.2. Variable Dependiente

La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

1.7. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.7.1. Métodos

En lo que se refiere a este trabajo académico para su análisis deberá en cuenta ciertas pautas tomando como ruta un punto de vista metodológico sirve de guía para la ejecución de la observación de la realidad; así pues, se tiene la aplicación de los métodos de la investigación, siendo labor interesante el ubicar aquellos que para la ciencia jurídica corresponde utilizar, en ese sentido se ha tenido en consideración aquellos referidos a la interpretación de las reglas, elemento importante porque permitirá corroborar el sentido jurídico de la ley; además de este tipo de métodos se ha de considerar también los que se refieren al hecho de observar las características más saltantes de los hechos que se suscitan socialmente con una determinación inductiva y deductiva con lo cual se logrará establecer de manera

adecuada si el problema que se genera como un efecto negativo sobre la efectividad del derecho a ser protegido por la jurisdicción de justicia, lo cual tiene relevancia en la sociedad y desde el punto de vista jurídico. Es por ello que a continuación se plasman cada uno de estos métodos que han sido aplicados para conseguir las determinaciones de esta investigación.

1.7.1.1. Método Exegético Jurídico

Como se ha explicado en el punto anterior, dentro de los métodos que corresponden a la interpretación de las leyes, se ha escogido el más directo que aplica la exégesis para el reconocimiento del sentido literal de las reglas, que para este caso en tanto se refiere al ordenamiento procesal penal a fin de establecer cuan adecuado es el planteamiento gramatical en la referencia jurídica de la prueba en la investigación preparatoria. Sobre este aspecto interesó la percepción del sentido probatorio en esta fase del proceso que se supone no corresponde un criterio de admisibilidad, puesto que sólo se está presumiendo su validez ya que su verdadera valoración corresponde a otra fase de la investigación penal.

1.7.1.2. Sobre la aplicación del método sistemático jurídico

Conforme se conoce en aplicación interpretativa de la realidad jurídica, implica ello la observación de las pautas normativas existentes en el ordenamiento desde una perspectiva relacional dentro del propio ordenamiento jurídico al que pertenecen, así se tendrá en cuenta las reglas que orientan la ejecución de los pasos que corresponden al momento del análisis del delito en su etapa preparatoria con

la intención de establecer algunos planteamientos que se pudieran estar indicando sobre la actividad probatoria, en cuanto a lo referente a la certeza o convicción que debe alcanzarse como resultado. Ello a fin de reconocer si este direccionamiento obedece a los lineamientos puntuales de aquella garantía sobre el carácter efectivo de la justicia a nivel jurisdiccional, lo cual supone deben asumirse conforme su estructura procesal.

De igual modo este análisis de sistematización se desarrollará sobre la contemplación de la estructura que ordena la investigación preparatoria en concordancia con la aplicación de la Constitución Política como norma rectora que esta compuesta por los principios generales que orientan la secuencia de actos vinculados con el análisis de la acción delictiva mediante el proceso, siendo ello materia de observación como la estricta contemplación en la consecuencia del valor probatorio que se obtenga en esta fase.

1.7.1.3. Método Hipotético Deductivo

Hacer uso de este tipo de análisis de los hechos ha conllevado al reconocimiento adecuado sobre la realidad, partiendo de un aspecto general del problema planteado para luego hacer una determinación específica respecto a sus consecuencias, así pues se tendrá en cuenta de manera amplia el ordenamiento jurídico que orienta el desarrollo de la investigación preparatoria a fin de obtener en base a su estructura la observación de su cumplimiento en la realidad jurisdiccional, con ello se logrará reconocer el alcance específico que se tiene

respecto de esta garantía que ofrece un principio con carácter rector en el ámbito penal del derecho, alcanzando así la identificación del nivel probatorio del criterio que se adopta por parte de los ejecutores en esta fase como son el Fiscal que tiene a su cargo la investigación y el Juez que habrá de reconocer la condición de la prueba en esta fase para dar pase o no a la acusación.

CAPÍTULO II

El principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal.

Los actos de investigación que se producen en el ámbito procesal penal se rigen en función a pautas específicas, las mismas que dependen de una estructura macro que depende del ordenamiento constitucional como base del sistema. Es en virtud de ello que se puede colegir dicha estructura procesal con las garantías que supone el ordenamiento normativo que en tanto protección se vincula directamente con la tutela, sobre todo en la verificación del sentido de efectividad que pueda lograrse en su ejecución.

Los elementos que se aprecian como mecanismos de control, son precisamente los principios generales del derecho, como es el caso de la tutela jurisdiccional que se estudia en este capítulo, puesto que se pretende establecer una línea de acción eficiente respecto a la administración de justicia que le corresponde al Estado como responsabilidad de control. Esta acción punitiva debe estar dotada de características particulares que permita evidenciar de manera adecuada el nivel de responsabilidad que pueda ser atribuida al supuesto responsable de la acción delictiva.

El sentido de tutela se orienta a garantizar un proceso limpio, bajo la tutela de protección de los derechos fundamentales que corresponden a los que participan en el desarrollo de esta secuencia de actos procesales. Básicamente ello se encuentra justificado en tanto que la verificación de responsabilidad penal implica la limitación de ciertos derechos que son trascendentales para el desarrollo de la

persona, por tal condición corresponde atender con suma delicadeza el análisis jurídico y fáctico, a fin de evitar arbitrariedades o injusticias que se produzcan por una mala administración del sistema.

2.1. Antecedentes del problema.

Como parte de la evaluación del sistema de justicia en relación con la tutela de derechos desde la perspectiva del derecho penal, conviene realizar un análisis de las determinaciones académicas que se han generado previamente a esta proyección. Es por ello que se ha tenido en consideración algunas investigaciones de tesis cuyos temas se vinculan con la protección jurisdiccional que en tanto acceso y garantías procesales corresponden a todos los participantes en la investigación penal.

De acuerdo a lo señalado se han seleccionado las tesis más cercanas al planteamiento del problema con el fin de establecer un criterio sobre el nivel de conocimiento que se hubiera alcanzado, lo cual servirá de punto de partida para establecer el propio criterio del investigador.

Teniéndose entonces en primera instancia el aporte del autor De Olivera (2009) el cual desarrolló una investigación titulada: *“El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la perspectiva de los derechos fundamentales”*, en el cual plantea la siguiente concepción sobre el derecho fundamental de accesibilidad a la jurisdicción como una facultad de ejercer la exigencia sobre determinados órganos judiciales dentro de un plazo de tiempo preestablecido, lo exigido mediante

este recurso jurídico se trataría entonces de: “(...) el desarrollo completo de sus actividades, tanto decisorias, con emisión de un pronunciamiento procesal o de mérito sobre el objeto de la pretensión procesal, como que pueda ser realizado efectivamente desde el punto de vista material. (p. 9)

De acuerdo a las formas en que se han indicado, se trata realmente del acercamiento al ejemplo de la equidad que representa la igualdad en la sociedad, que específicamente en el entorno latino ha cobrado fuerza. Se trata pues de tomar el ejemplo clásico en el cual se puede encontrar características muy particulares relacionadas con la igualdad y la equidad de la sociedad. Siendo así, los cambios de este tipo de relación o vínculo en la sociedad lleva a la idea una “(...) teoría universal a la particular, tiene un impacto directo en el proceso; pues en el Estado Social de Derecho se nutre, más allá de la ley, a partir de la realización de una macro garantía constitucional denominada: tutela judicial efectiva, por medio de la cual se integran valores como la justicia, la igualdad, la verdad y la libertad”. (Ramírez Carvajal, 2017, págs. 6-7)

2.2. El principio de tutela jurisdiccional efectiva

Se entiende que este como todos los principios que participan en la pauta doctrinaria, tienen una función de control respecto a la aplicación del derecho, es decir que se presentan como una herramienta que permite interpretar la regla ante la necesidad de resolver casos difíciles o cuando la pauta normativa no se encuentre lo suficientemente clara. Esta vinculación es de orden obligatorio, la potestad de

interpretar se rige por la línea de análisis de la situación en la que se presente, esto es la coyuntura tanto normativa así como fáctica, lo cual presenta la opción de un control adecuado, que para el caso particular de este principio representa el origen de la protección, esto es el acceso al sistema de justicia.

“El derecho fundamental de acceso a la jurisdicción se traduce entonces en el poder de exigir del órgano judicial, en tiempo razonable, el desarrollo completo de sus actividades, tanto decisorias, con emisión de un pronunciamiento procesal o de mérito sobre el objeto de la pretensión procesal, como que pueda ser realizado efectivamente desde el punto de vista material. Todo eso debe conformarse con el concepto de adecuación, con la proporcionalidad necesaria entre el derecho fundamental a un proceso justo y el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva y adecuada”. (De Olivera , 2009, pág. 9)

“En cualquiera de estas dimensiones, es una realidad que el paradigma de la justicia con un sentido social se está transformando dentro de la sociedad latina a la manera de Kunh. En donde el paradigma tradicional en el que confluyen lo particular y el equilibrio social” (Ramírez Carvajal, 2017, págs. 6-7). Se entiende de ello que los cambios sociales deben tener influencias directas en el desarrollo de la actividad jurídica para la creación de las reglas, esto es la ejecución de los actos procesales para el caso de la investigación de los hechos que afectan a la sociedad y los particulares.

Dada la estructura de un tipo de Estado que influencia el aspecto social debe determinar efectos que superen el ámbito de aplicación de las reglas, esto es

que constituyan más que un marco regulador, un ámbito de protección que desde la previsión constitucional otorgue una adecuada tutela para alcanzar la justicia en un espectro jurisdiccional, esto con la mayor efectividad posible, valiéndose para ello de la existencia del valor justicia, así como la proyección de la equidad, las condiciones de certeza y la correspondiente libertad que corresponde a cada sujeto.

El derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales y con ello de acceso al derecho y a la justicia, se encamina hacia un nuevo rumbo para transformarse, paralelamente el cambio en el modelo de justicia, en un derecho de acceso a la tutela jurídica de derecho e intereses en sentido amplio, sin que ello implique necesariamente que el ciudadano tenga que acudir exclusivamente para obtener justicia a los órganos jurisdiccionales. La tutela judicial efectiva, como derecho fundamental, ha de expandirse hacia las demás variantes que se van integrando en la Administración de la justicia, y por lo tanto transformarse en <<tutela efectiva de la justicia>>. (Martín Diz, 2014, pág. 6)

El derecho a la tutela judicial efectiva se ha extendido para cobijar el interés legítimo o derecho reflejo del individuo, el cual es definido por el derecho objetivo como aquel que es jurídicamente relevante “... por adentrarse, en cuanto elemento fáctico, en la órbita de la realidad social que incide sobre la ordenada convivencia de la comunidad o colectividad, por lo que es digno de tutela jurídica”, o, lo que es lo mismo, las situaciones indirectas de ventaja que las disposiciones

jurídicas atribuyan a los ciudadanos, con lo cual se ha buscado ampliar el espectro de protección jurídica y de control judicial, sobre la base de entender los intereses legítimos individuales. (Araújo Oñate, 2011, pág. 17)

2.3. La tutela jurisdiccional efectiva en el derecho penal

La estructura del ordenamiento jurídico pone en primer término al pilar normativo que es la norma constitucional inspirada en un concepto de justicia la cual siempre ha tenido por característica un cierto tipo de limitación. Como se puede señalar de primera parte se construye el esquema con la intención de que los sujetos puedan ejecutar acciones legislativas, lo cual es evaluado a nivel de la estructura internacional de la interpretación constitucional, se precisa que previamente habrá participado en un proceso jurisdiccional ordinario sea en el ámbito jurídico civil o también en los que corresponden a la investigación penal o el reconocimiento administrativo de los derechos que le corresponde; en cuyo análisis se verifique la regla que tiene carácter inconstitucional lo suficientemente importante. “En segundo lugar, la Corte Constitucional debe limitarse a examinar la legitimidad, desde el punto de vista de la Constitución, de las leyes o actos que tengan fuerza de ley, pero no de otros actos de imperio, o sea de actos jurisdiccionales o administrativos”. (Toscano López, 2013, pág. 10)

Las condiciones jurídicas que se han construido por parte del Estado para propiciar tutela en el ámbito de justicia, se han tenido en cuenta como parte de la acciones que le corresponden al ser humano, que conllevan a la realización de actos

que permitan alcanzar dicho estado mediante el uso del sistema de justicia. En dicho sistema es que se puede ubicar a la estructura procesal como una herramienta que se plantea como finalidad la materialización de las garantías que representan los derechos humanos, tanto a nivel individual, en el ámbito social, el aspecto económico, la perspectiva colectiva o el grupo que se derivan en consecuencias solidarias que incluso pueden alcanzar ámbitos como la protección frente a la necesidad de los alimentos, elementos de seguridad que se vinculan incluso con el entorno ambiental, todo ello precisa de la intervención en un espacio temporal que se lo suficientemente necesario para su ejecución.

El desarrollo de la actividad jurisdiccional explicada en el esquema de la tutela de derechos que organiza el Estado, debe tener una condición especial que somete a todos los ciudadanos al mismo esquema de justicia, por lo mismo que se presenta la función del juzgador como el representante estatal para que a través de un acto resolutivo que describe el derecho o la condición de quienes intervienen en el proceso, se va asegurados sus derechos mediante el sentido garantista que supone dicha estructura procesal.

Esto supone la participación de características de existencia de condiciones contradictorias, las reglas de un adecuado proceso que conlleve a la ejecución en igualdad de cada uno de los participantes. Todo esto implica que se deba tener especial cuidado en la forma que se imparte justicia, lo cual requiere de mayor control, sobre todo mediante la división de momentos de la investigación como es en el caso de la intervención penal. Pese a ello se presenta en el desarrollo de la

secuencia del proceso que en ocasiones puede ser de manera previa, la existencia de características o circunstancias de variada condición, que se derivan de ciertos actos de carácter material que ejecuta alguno de los participantes cuyo derecho pueda estar en peligro, para lo cual se requiere de esta protección a fin de evitar la existencia de daños mayores.

“Si esto ocurre, el fin del proceso jurisdiccional, cual es impartir justicia, tutelando los derechos o intereses jurídicamente protegidos por el ordenamiento, se vería totalmente frustrado. La frustración en la forma de acceso a la justicia, y en la falta de actuación oportuna de los órganos jurisdiccionales, a su vez, va generando una situación de desconfianza, por la lentitud y poca eficacia de los procesos judiciales. Efectivamente, hoy se acusa la lentitud de la justicia a través de la mora judicial, y la carencia de mecanismo idóneos para proteger los derechos de los ciudadanos”. (Ulate Chacón, 2007, pág. 4)

El estado tiene el ius puniendi para cumplir el deber de garantizar la coexistencia humana, asegurando la vigencia de los bienes jurídicos fundamentales. El poder punitivo del Estado o ius puniendi es la atribución que tiene para definir conductas como hechos punibles e imponer penas a las personas que las realizan. Empero, el Derecho Penal no solo tiene una finalidad represiva o sancionadora, sino que además implica dotar a las personas de ciertas garantías generales y específicas que la protegen ante la eventualidad de ser sometida a un proceso penal y, en último

término, ante la posibilidad de imposición de una sanción punitiva. (Ynga Masilla, 2015, pág. 6)

El derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y, desde esa perspectiva, se sitúa, no como un mero instrumento jurisdiccional atemporal, acrítico y mecanista sino ante todo, como un sistema de garantías, que posibilita la rotunda aplicación del artículo 24 de la CE, en orden a lograr la tutela judicial efectiva, y básicamente ordenado a alcanzar un enjuiciamiento en justicia. Cuando el derecho procesal regula el ejercicio de la función jurisdiccional, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se está primando el sistema de garantías que contiene, no siendo afortunado señalar que el derecho procesal contempla, fundamentalmente la aplicación ----vertiente instrumental---- a través de su normativa específica, del ordenamiento jurídico ya sea civil, laboral, penal, o en fin, contencioso-administrativo. (Lorca Navarrete, 2003, págs. 3-4)

CAPÍTULO III

La estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal.

En función al contenido que sugiere la formulación del problema, es preciso reconocer con claridad la forma en que se ha estructurado la pauta probatoria en el desarrollo de las investigaciones penales, ello con el fin de tener en concreto la convicción de su alcance como medio que permite establecer certeza al final del proceso, vale decir sobre la certeza respecto a la responsabilidad que se ha de atribuir al supuesto autor de la acción delictiva.

En virtud de ello se hace necesaria la verificación del concepto de prueba otorgado por la doctrina, sobre todo en función al racionalismo que se pretende incorporar con su participación como elemento necesario par establecer el vínculo entre el hecho punible y la acción del sujeto al que se le imputa la autoría. Esta condición debe ser trasladada a los intereses de esta evaluación académica con respecto a su necesaria función de control en la fase de la investigación preparatoria a fin de evitar que los elementos que se verifiquen en el ámbito de juicio sean solamente los pertinentes e idóneos, logrando con ello la suficiente celeridad y garantía que le corresponde como característica a la investigación.

3.1. El esquema probatorio en la investigación penal

La doctrina ha establece una concepción bastante lata de lo que se debe entender por prueba el cual esta relacionado con la necesidad de conocer la verdad de manera objetiva y hasta racional, lo cual es recogido en la legislación que se ocupa de la acción punitiva como una percepción legalista de esta prueba como elemento de investigación. Esta percepción otorga un sentido de acción objetiva,

que se desarrolla en función a como es valorada para ser luego usada en el sistema de justicia penal, lo cual conlleva a entender que la condición de indicio tampoco es lo suficientemente clara.

Es por ello que habrá de orientarse la observación hacia una combinación de análisis tanto doctrinario y jurisprudencial, con lo cual se pretende generar efectos de comprensión sobre el ámbito que ocupa su aplicación. En tal sentido se puede toma lo señalado por el jurista García Caveró que tomado por la interpretación de otros investigadores señalan: “En la doctrina procesal, la prueba por indicios es entendida, por lo general, como aquella prueba que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de hechos que no constituyen la hipótesis de incriminación, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta”. (Almanza, Flores, Paucar, Portugal, 2007, p. 5)

De acuerdo a ello lo que se debiera entender sobre este elemento probatorio como instrumento en el proceso penal se vincula bajo una condición que se adhiere de manera volitiva o bajo carácter implícito, esto es la percepción de ideológica respecto a las funciones que desempeña en el desarrollo procesal, ello de acuerdo a las condiciones históricas y culturales en las que se circunscribe, esto es para casos especiales con la particularidad que representa. “Lo que implica una inteligible superación de la idea de que todo lo concerniente al proceso. Lo que implica una inteligible superación de la idea de que todo lo concerniente al proceso y por ende al fenómeno probatorio, sea una cuestión de mera técnica procesal y por ende al

fenómeno probatorio, sea una cuestión de mera técnica procesal o que se trate de una opción legislativa sin ninguna vinculación ideológica, sino todo lo contrario, se postula que existe una estrecha relación de dependencia entre la opción ideológica del proceso y la función de la prueba de los hechos”. (Alfaro Valverde, 2016, pág. 14)

En nuestro idioma no existe palabra específica para aludir a los principales rubros sobre los cuales se proyectan la prueba en juicio. El término “prueba”, en efecto, es polisémico, pues designa diversos aspectos cada uno con un significado especial. Además, la prueba judicial es una figura multidisciplinaria, ya que involucra varias áreas del quehacer humano que, si bien tiene relación, es necesario diferenciar para una adecuada comprensión de las cuestiones asociadas con ella. Así, tomando una descripción global y amplia de este fenómeno, es posible mencionar tres importantes facetas de la prueba procesal, en cada una de las cuales se presentan con distinta intensidad las disciplinas que concurren en el rubro del establecimiento judicial de los hechos. Cabe hablar de la prueba como actividad, medio y resultado. (Meneses Pacheco, 2014, pág. 3)

En el contexto de la prueba en el proceso penal, el derecho a la presunción de inocencia adquiere una doble manifestación, como regla probatoria y como regla de juicio. Es así como en la primera de estas –regla probatoria- supone la necesaria existencia de actividad probatoria de cargos practicada con todas las garantías. De otro lado, en su función de regla de juicio, asume un papel relevante al momento de la valoración de la prueba exigiendo la existencia de los criterios necesarios para

que el juez logre la decisión sobre el caso concreto, así como también, el resultado de la misma en los casos en que la prueba de cargo sea insuficiente. (Reyes Molina, 2012, pág. 3)

Tal cual se verifica en lo señalado, el concepto se aparta de un sentido simétrico de la potestad que le corresponde a quien la ofrece, la carga que representa la prueba, así como la obligación de cada uno de los intervinientes en el proceso, en ese sentido se asume que la secuencia del proceso, la condición de controversia que se figura procesalmente de acuerdo al tipo de esquema de investigación, conlleva a una condición de distribución de sus funciones, de acuerdo a la fase o momento en que se incorpora o evalúa.

No es posible señalar por ello que si un sujeto parte del proceso esta en la obligación de tener como carga la acreditación de cierta acción, lo que trastoca la especificación de control que se proyecta con la igualdad como principio procesal. Tampoco sería correcto señalar que el magistrado toma la decisión de modificar la condición de carga probatoria en función a su vínculo con el sujeto que litiga o el origen del elemento probatorio, si que ello signifique también romper el enlace de garantía que otorga aquel principio. “Se trata, en síntesis, de sostener una razonable igualdad de posibilidades, con el objeto de que las partes puedan influir en el resultado final del proceso. El proceso debe articularse como la balanza equilibrada de posibilidades de acción y defensa, para uno u otro litigante”. (Hunter Ampuero, 2011, pág. 4)

Es apropiado señalar que el concepto de elemento probatorio se vincula con la acción de acreditar la existencia de condiciones, circunstancia, un hecho desarrollado en la realidad, con la intención de establecer un sentido de verdad entre lo que se señala y lo objetivo de la realidad. Ello se orienta a la adopción de pautas o criterios decisorios en base a un sentido legalista que le corresponde asumir a quien se ocupa de juzgar.

Además de ello se puede indicar que el concepto de prueba de oficio tiene el carácter particular que le corresponde a la decisión o aquello que dispone el magistrado de manera directa o en su caso por los miembros del tribunal, sobre todo en el espacio condicionado del proceso en que se precise de un mayor concepto de certeza que permita esclarecer la verdad pasada la fase usual de la prueba. Se entiende como un concepto universal el hecho de que quien ofrece una condición particular como hecho en la realidad tiene la obligación de demostrar su existencia objetiva, lo cual corresponde a quien acusa que en este caso es el representante de la potestad punitiva del Estado en el proceso, esto es el Fiscal.

Mas allá de ello se tiene la participación de quienes deben ocuparse de la recopilación de elementos de prueba que alcance un sustento sobre la postura que adopta la defensa del imputado. Pese a ello se constituye como excepción la existencia de una posible opción de que sea el ente institucional del sistema de justicia el que se ocupe de la actuación de ciertas pruebas en la fase final de la investigación que busca esclarecer la verdad sobre la responsabilidad penal, lo cual obviamente aportará de elementos de certeza para la adopción del criterio decisorio de parte del magistrado mediante el acto resolutorio final.

Esta indicación es importante en tanto que “(...) detrás del desarrollo procesal existe un interés público en la persecución del delito, justificándose de esta manera que cuando el juez no haya podido aclarar suficientemente los hechos, ordene la práctica de ciertos medios de prueba ordenados de oficio por el juzgador”. (Córdova Pardo, 2020, pág. 18)

En el debate sobre la racionalidad e ideología en las pruebas de oficio y el debido proceso contra las pruebas de oficio, que se resumen en la discusión sobre si el juez puede o no decretar pruebas, es posible afirmar que posee mayor grado de razón el primero, entre otras, a partir de su reconocimiento expreso en distintos estatutos procesales en el derecho comparado. (Yáñez Meza & Castellano Castellanos, 2016, pág. 18)

El reconocimiento judicial de personas, lugares, es un medio de pruebas más. Al igual que cualquier otro medio probatorio, las partes podrán ofrecerlo en la oportunidad procesal pertinente, y el juez decidirá si lo considera procedente. El reconocimiento judicial, en principio, debe llevarlo a cabo el juez personalmente. Pues la impresión personal que este reciba, no puede ser transmitida mediante las constancias que se asienten en un acta. En el acto, pueden participar no sólo las partes y sus letrados, sino –según el caso—peritos y testigos. Además y como todo medio de prueba, el mismo debe recaer sobre hechos controvertidos y conducentes, y que, además, sea posible de llevar a cabo. (Soledad Márquez, 2015, pág. 15)

3.2. Criterio probatorio del Juez y el Fiscal

Los de cortes acusatorio prescinde de la instrucción para sustituirla por la investigación preparatoria –a cargo del Fiscal--, cambiando al Juez de instrucción por el Juez de la investigación preparatoria. El proceso se concibe como un debate de partes, en el que las pruebas se producen en el juicio oral, con observancia del contradictorio. La fase intermedia se consolida como un filtro previo al juicio oral. Este es el caso de Italia, Alemania, Chile, Bolivia, Bélgica, Costa Rica, Inglaterra, Portugal, Venezuela, y el Perú (a partir de febrero de 2006). (Oré Guardia & Loza Avalos, 2005, pág. 2)

El artículo 336 del Código Procesal Penal señala que si de la denuncia, del informe policial o de las Diligencias Preliminares que realizó el ministerio Público, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación Preparatoria. En este caso, el estándar de prueba que se requiere es el de la “sospecha reveladora”. La formalización de la investigación preparatoria es el grado intermedio de sospecha, y se requiere contar con “hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de un determinada conducta delictiva, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación”. (Espinoza Ariza, 2019, pág. 7)

Realizando un primer análisis a prima facie de las disposiciones fiscales de archivo y dialogando con los propios magistrados se ha podido advertir que los fiscales buscan siempre elementos de convicción directos, como declaraciones de partes, testigos, pruebas documentales, videos, grabaciones u otros medios físicos que demuestren la comisión del delito; pero, en la actualidad y con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal para iniciar diligencias preliminares solo se requiere la simple sospecha y para formalizarse investigación preparatoria se requiere que existan indicios reveladores de la comisión del delito, que la acción penal no haya prescrito y que se haya individualizado al denunciado. Y sobre todo, no se dan cuenta que la nueva legislación procesal penal les ha dado una herramienta que no está siendo utilizada, que es la prueba por indicios; en rigor lo que queremos decir es que cuando no se tengan elementos directos que evidencien la comisión del delito, pero se tiene la existencia del delito, se tiene que recurrir a los indicios. (Calsin Coila, 2015, pág. 2)

El necesario reconocimiento de que las partes inician y delimitan el objeto del proceso en el juicio e introducen los medios probatorios –que está en la propia lógica acusatoria--, puede matizarse razonablemente con el poder de prueba complementaria y, también, con el poder oficial de ordenación del material probatorio y de revisión libre de la prueba instrumenta. (San Martín Castro, 2007, pág. 12)

Se entiende en base a ello que el para arribar a determinaciones, se requiere de la certeza o convicción de una circunstancia en la realidad, por lo mismo que

resulta de utilidad entender el sentido que aportan los estándares probatorios “son también llamados estándares de decisión o reglas de peso probatorio, los cuales deben ser entendidos como un conjunto de directrices cuyas características son la generalidad y la flexibilidad, cuya finalidad es buscar dirigir la valoración de la prueba en la fase de la decisión final, es posible en base a ello también señalar que se consiguen determinar cuándo es que se da por cierta o probada una determinada hipótesis”

Siendo así la estructura del criterio de quien valora la prueba en las etapas del proceso penal, tiene un amplio grado de responsabilidad, así pues, debe entenderse que estos estándares cubren de importancia a la manera en que se adopta la decisión, vale decir que, “Estos umbrales probatorios tienen que estar determinados, por lo contrario, será imposible para el magistrado tomar la decisión sobre el caso; es necesario conocer el nivel de forma objetiva, el cual nos indicará cuando se ha superado el nivel de corroboración de la hipótesis fáctica, y en efecto, se acepte como probada”.

Como se aprecia el nivel de probanza respecto a los hechos que se plantean como elementos probatorios, resultan de plano indispensables para el establecimiento del criterio del magistrado, lo cual se alcanza mediante la participación de estas herramientas que sirven de guía para el establecimiento hipotético de la responsabilidad penal, dado que: “Los estándares de prueba-guías de valoración racional-son criterios que indican cuando se ha conseguido la prueba

de un hecho; siendo que su construcción implica dos presupuestos: 1) decidir qué nivel de probabilidad se requiere para tomar a una hipótesis como verdadera; y también que, 2) su formulación se realice en base de criterios objetivos, los que indicaran como alcanzar el grado de probabilidad exigido”.

Ello es precisamente lo que se requiere controlar en la fase de la investigación preparatoria desde el momento de su formalización, lo cual debe ser evidenciado en base a los criterios probatorios necesarios y suficientes, “la decisión de formalizar investigación preparatoria, implica así, indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad o la sospecha suficiente, umbral que se debe alcanzar para tomar la decisión de formular acusación y la expedición de auto de enjuiciamiento. El vocablo sospecha no es utilizado en una acepción vulgar, sino por el contrario, en un sentido técnico-procesal; esto es como un estado de conocimiento intermedio, que varía su intensidad, de acuerdo a los datos inculpatórios provenientes de los diversos elementos que se encuentran incorporados en el proceso penal producto de distintas actuaciones de investigación; y para así, dependiendo de dicha intensidad, se autorice dictar ciertas decisiones en el proceso, como por ejemplo la imposición de medidas limitativas de la libertad”.

Capítulo IV

Análisis y resultados

4.1. De los resultados del análisis estadístico

Cantidad de casos ingresados a los juzgados penales en la ciudad de Chiclayo.

Cantidad de expedientes ingresados en los órganos jurisdiccionales penales de Chiclayo de la CSJLA								
Periodo: 01 Ene 2015 - 11 Ago 2021								
ÓRGANO JURISDICCIONAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	804	853	1109	713	1042	604	334	5459
1° JUZG. UNIPERSONAL	607	643	271	442	764	369	342	3438
10° JUZG PENAL UNIPERSONAL ESP. DELITOS CORRUP. FUNCIONARIOS	0	0	0	232	105	22	37	396
10° JUZG. INVEST. PREPA. ESP. DELITOS CORRUP. FUNCIONARIOS	0	0	0	258	99	86	35	478
2° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	815	913	1291	797	926	632	321	5695
2° JUZG. UNIPERSONAL	631	610	453	649	1083	390	388	4204
3° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	887	921	1261	717	870	685	319	5660
3° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	582	760	1475	975	1248	407	392	5839
4° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	611	714	1534	1124	1258	389	379	6009
4° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CRIMEN ORGANIZADO	0	0	0	0	0	29	7	36
5° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	922	445	299	191	444	378	304	2983
5° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	593	702	1493	1054	1329	450	422	6043
6° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	886	452	226	178	316	380	329	2767
6° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	607	712	1404	1096	1400	401	440	6060
7° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	961	465	236	220	443	342	319	2986
7° JUZG. UNIPERSONAL	609	619	308	443	847	242	314	3382
8° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	0	185	435	140	641	499	331	2231
8° JUZG. UNIPERSONAL	614	605	347	492	975	314	273	3620
8° JUZGADO UNIPERSONAL SUPRA. (ADIC. FUNC. LIQUIDADORA)	0	0	144	69	122	28	32	395
9° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	0	912	648	1502	1500	318	257	5137
9° JUZGADO INV. PREPARATORIA - DELITOS AD. TRIB. MCDO Y AMB.	0	101	554	320	401	300	165	1841
JUZG PENAL LIQ (AD. FUNC. J EXTINCIÓN DOMINIO)	0	0	0	0	93	16	17	126
JUZGADO PENAL COLEGIADO CONFORMADO DELIT. CORRUP. FUNC.	0	0	0	0	15	13	10	38
JUZGADO TRANSITORIO ESPEC. EXTINCIÓN DE DOMINIO	0	0	0	0	1	30	41	72
TOTAL	10129	10612	13488	11612	15922	7324	5808	74895
Elaboración: Of. Estadística- CSJLA 12/08/2021								
Fuente: SIJ - Hitos Estadísticos								

Cantidad de casos apelados en los juzgados penales en la ciudad de Chiclayo.

Cantidad de expedientes apelados en los órganos jurisdiccionales penales de Chiclayo de la CSJLA								
Periodo: 01 Ene 2015 - 11 Ago 2021								
ÓRGANO JURISDICCIONAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1° JUZG. UNIPERSONAL	9	19	11	11	16	8	3	77
2° JUZG. UNIPERSONAL	9	16	14	11	11	6	5	72
3° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	6	0	0	0	0	0	0	6
4° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	6	1	0	0	0	0	0	7
5° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	15	1	0	0	0	0	0	16
6° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	10	0	1	0	0	0	0	11
7° JUZG. UNIPERSONAL	10	18	13	9	13	7	2	72
8° JUZG. UNIPERSONAL	8	16	10	13	13	8	2	70
9° JUZG. UNIPERSONAL - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	0	0	3	9	13	8	3	36
7° JUZG. INVEST. PREPARATORIA	0	1	0	0	0	0	0	1
8° JUZG. INVEST. PREPARATORIA - FLAGRANCIA, OAF Y CEED	0	0	2	0	0	0	0	2
TOTAL	73	72	54	53	66	37	15	370
<i>Elaboración : Of. Estadística- CSJLA 12/08/2021</i>								
<i>Fuente : SIJ - Hitos Estadísticos</i>								

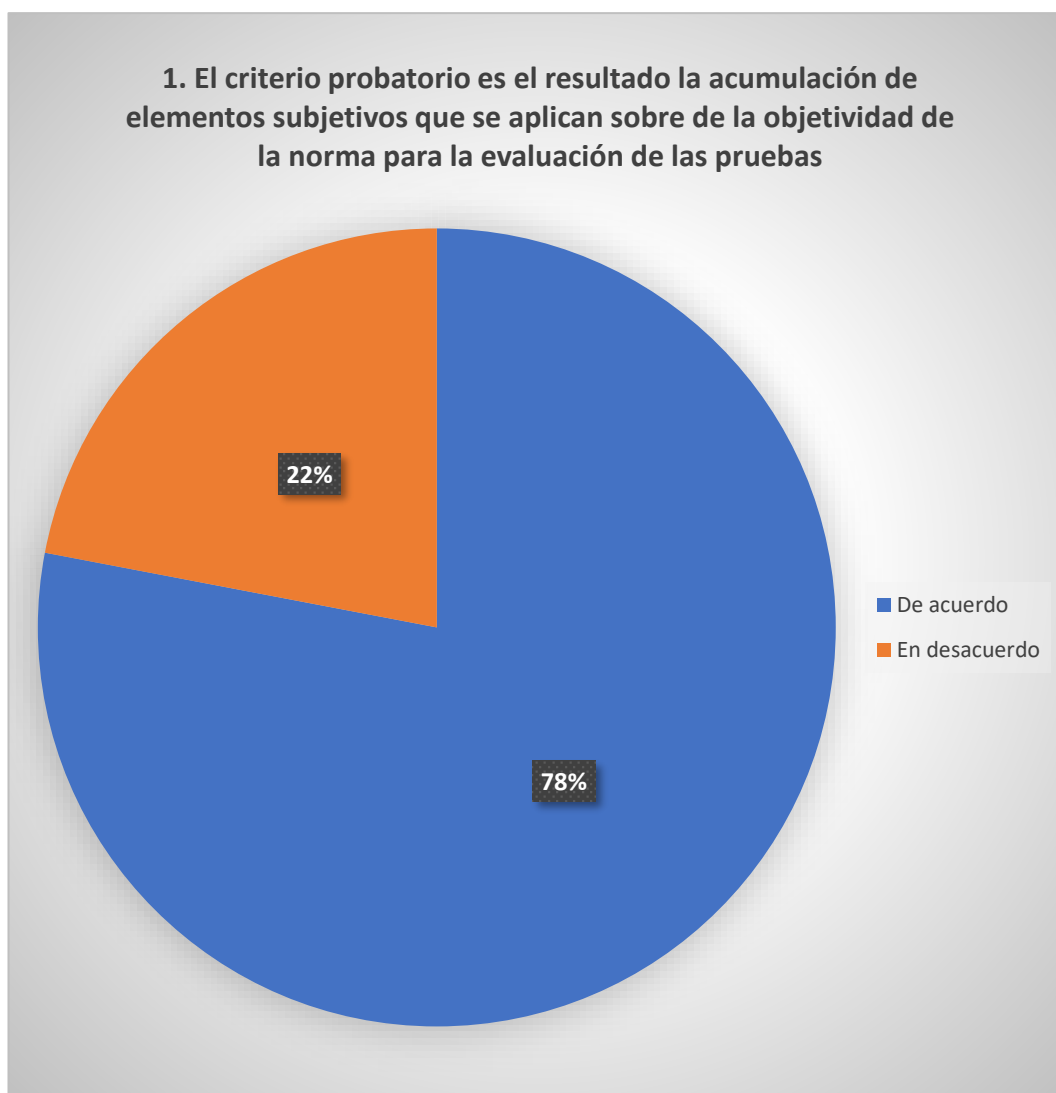
4.2. De los resultados de la opinión de expertos

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 1”.

- 1. El criterio probatorio es el resultado a la acumulación de elementos subjetivos que se aplican sobre la objetividad de la norma para la evaluación de las pruebas.**

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	11
Total	50

Ilustración 1: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 1”.



Se ha observado de manera gráfica los resultados provenientes de aplicar la encuesta mediante lo cual verifica la condición de validez lo cual alcanza al 78% del total de los encuestados respecto a la indicación de que el criterio que corresponde a la prueba resulta ser la conjunción de elementos de tipo subjetivo que son aplicados sobre la objetividad de la norma jurídica con el fin de evaluar las pruebas. Sobre ello corresponde indicar que la postura adoptada por esta investigación es que sobre este tipo de intervención jurisdiccional al existir control

de objetividad, tendría que verse reflejado en la evaluación de los resultados de imputación.

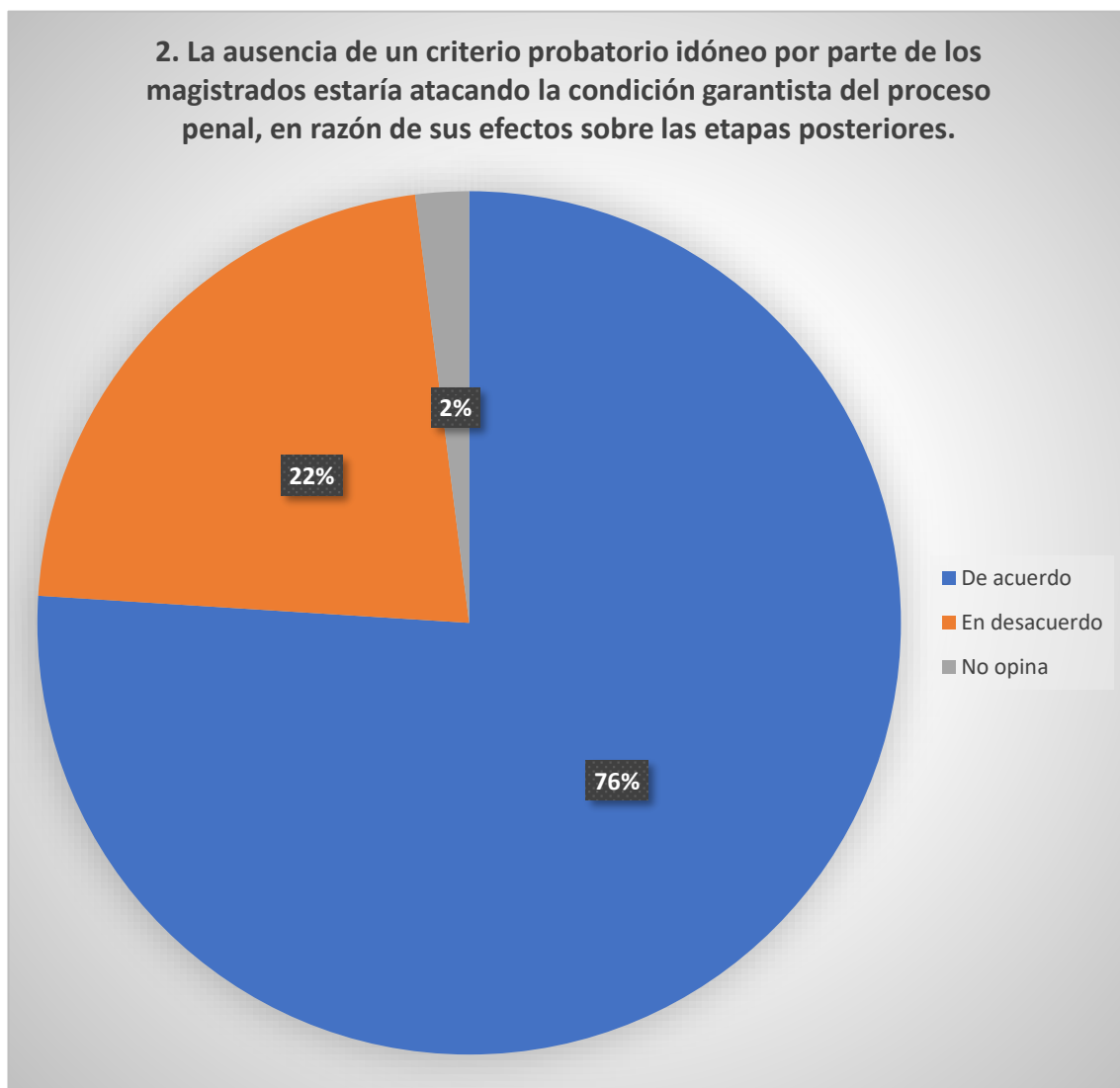
Esta condición de evaluación que trae como consecuencia el control implica que la acción de la judicatura debe adoptar un carácter razonable para la verificación del nivel de probanza a fin de que no se observen circunstancias de revisión de los fallos en función a falencias o subjetividad al momento de la evaluación de la objetividad probatoria que ha de basarse en la construcción de las reglas y la objetividad de su aplicación.

Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 2”.

2. La ausencia de un criterio probatorio idóneo por parte d ellos magistrados estaría atacando la condición garantista del proceso penal, en razón de sus efectos sobre las etapas posteriores.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	38
b. En desacuerdo	11
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 2: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 2”.



OBSERVACIÓN: Tal cual es de observar existe un resultado que arroja datos en función a los resultados obtenidos por parte de los especialistas, en tanto expertos, existe un nivel de validación de parte de ellos que alcanza un nivel de 76%, el cual implica más de $\frac{3}{4}$ partes de los encuestados, reforzando el nivel crítico que realiza esta investigación en referencia a la falta de criterios que permitan una condición probatoria idónea de parte de la judicatura.

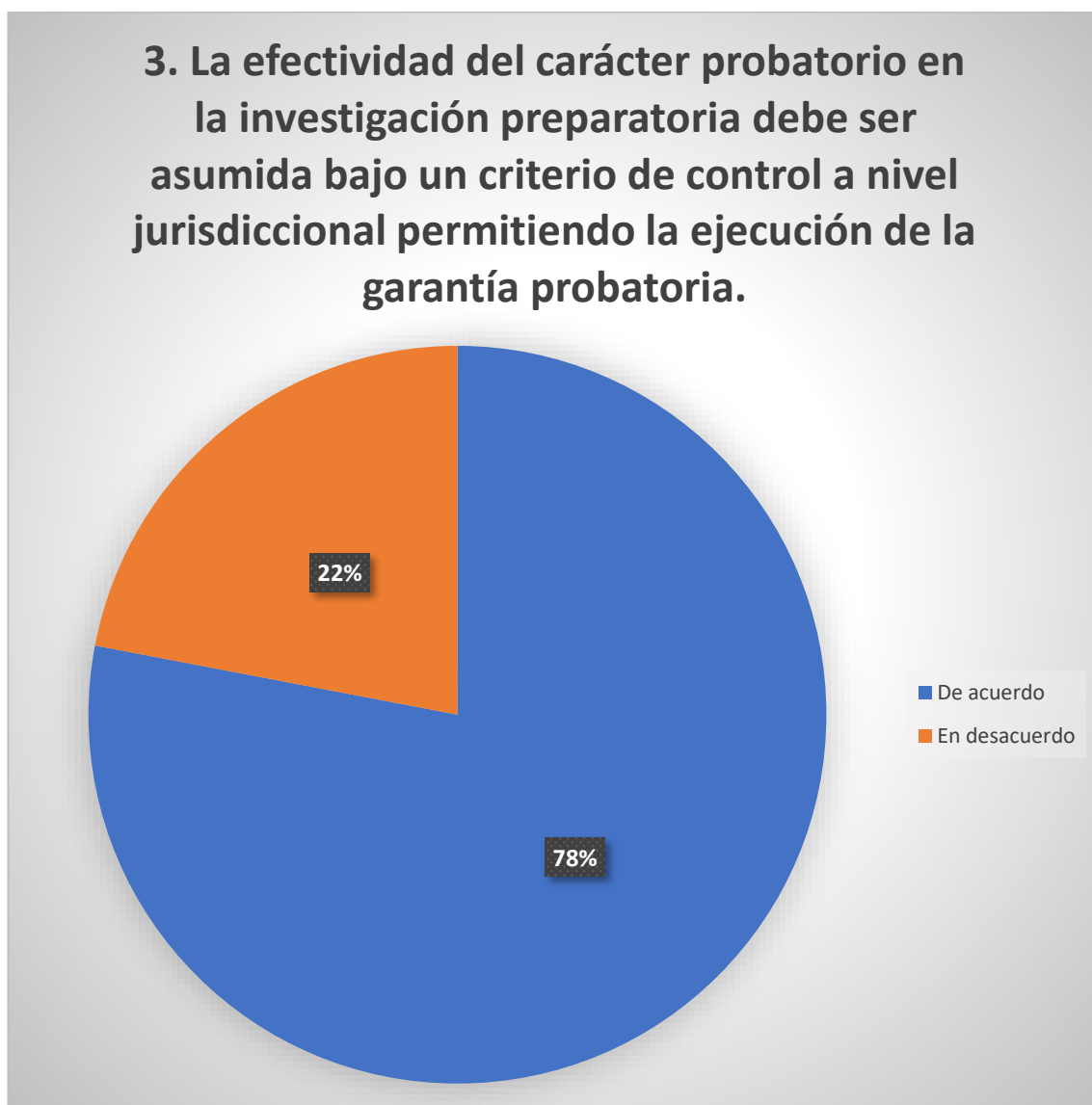
Es importante recalcar que esta condición advertida, estaría atacando no sólo la condición de respeto de las reglas de valoración probatoria, sino que también traen como consecuencia una situación que desvincula de la condición garantista que se entiende debe tener el proceso penal. Esta situación se verifica en la existencia de un criterio con bajo estándar probatorio que tiene repercusiones en las siguientes etapas del proceso, lo cual pone en riesgo la tutela jurisdiccional efectiva.

Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 3”.

3. La efectividad del carácter probatorio en la investigación preparatoria debe ser asumida bajo un criterio de control a nivel jurisdiccional permitiendo la ejecución de la garantía probatoria.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	11
Total	50

Ilustración 3: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 3”.



OBSERVACIÓN: Esta sugerencia se encamina a la función de control de la jurisdiccionalidad que debe operar en todos los procesos, sobre ello se verifica la posición de los expertos que alcanza a un nivel de 78% de aceptación, esto es que consideran válida la sugerencia. En ese sentido debe entenderse como apropiado el hecho de que existan mecanismos que incrementen el carácter probatorio en lo que

corresponde a la fase de investigación preparatoria, así pues, cuando menos debe superarse el nivel de corroboración como un estándar probatorio aceptable a fin de que los juicios de valor que se establezcan en dicha fase alcancen el nivel de certeza necesaria que se entiende debe estar condicionada a la valoración de las pruebas.

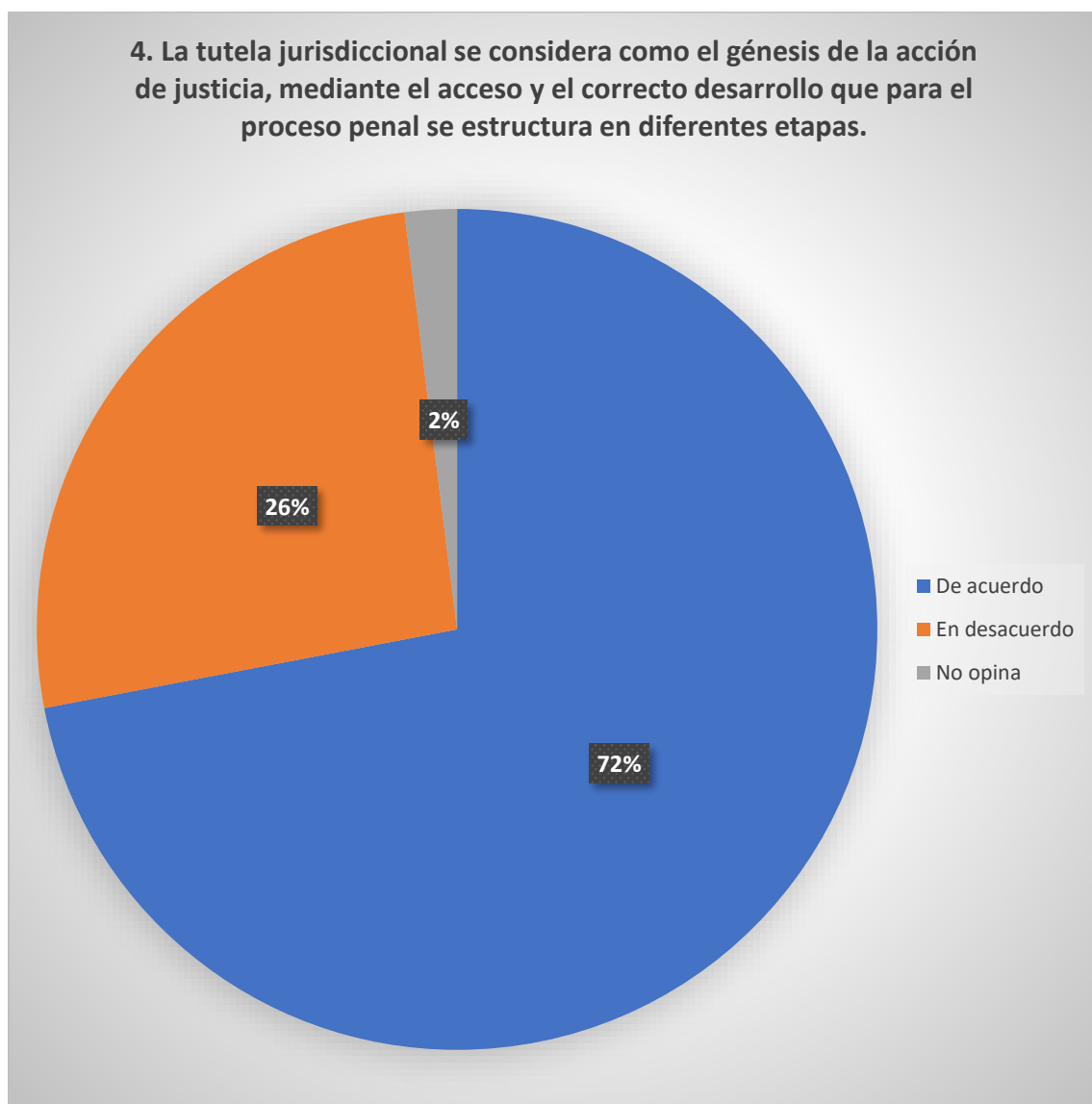
Este criterio de valoración se reconoce mínimamente como la verificación de los indicios suficientes que permitan no solo la corroboración de la ilicitud de los actos observados, sino que permitan además conducir el razonamiento hacia el nivel en que se plantea o atribuye la condición de responsable del acusado, sin la participación de ningún elemento justificante.

Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 4”.

4. La tutela jurisdiccional se considera como el génesis de la acción de justicia, mediante el acceso y el correcto desarrollo que para el proceso penal se estructura en diferentes etapas.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	36
b. En desacuerdo	13
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 4: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 4”.



Observación: según lo apreciado de las resultas en el gráfico porcentual se advierte un total del 72% de expertos que están conformes con la definición referida a la tutela jurisdiccional que se relaciona con la forma en que se lleva la secuencia de acceso a la justicia entendido ello como el origen de este derecho. Se asume por ello como adecuado el razonamiento que las condiciones planteadas en el esquema

de la investigación punitiva para este caso, debe asegurar en su construcción, la cristalización de ello a fin de propiciar suficiente seguridad jurídica a las partes que intervienen en la investigación.

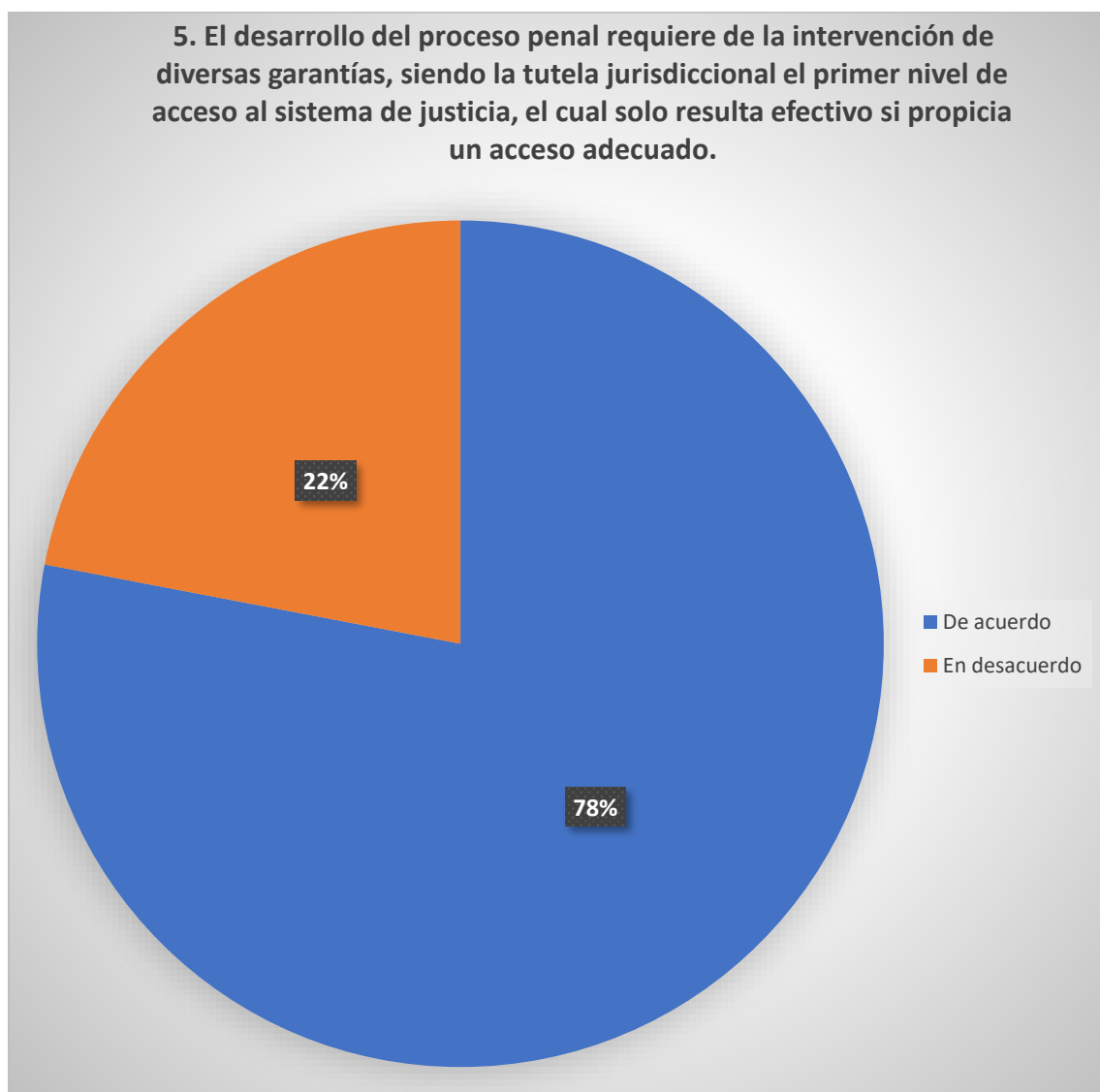
Es por ello de vital importancia que se realice la revisión constante de las formas en que se presentan en la realidad, todas aquellas posibilidades de error jurídico, lo cual puede ser generado no solo por la condición subjetiva de la acción jurisdiccional, sino que también puede estar marcada por falta de pautas específicas en la normativa que sean de condición idónea, sobre todo lo que interesa al planteamiento del problema, esto es orientada a los estándares probatorios que se muestran ejecutados en la fase preliminar.

Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.

5. El desarrollo del proceso penal requiere de la intervención de diversas garantías, siendo la tutela jurisdiccional el primer nivel de acceso al sistema de justicia, el cual solo resulta efectivo si propicia un acceso adecuado.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	11
Total	50

Ilustración 5: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.



Observación: de acuerdo con los cálculos de tipo porcentual que se obtuvo se advierte un 78% que validan la postura crítica respecto al proceso penal que de manera general plantea el sentido garantista que posee, heredado del Derecho Penal. Ante ello se consolida la condición proteccionista que ampara al proceso a fin de

garantizar el bienestar jurídico, sobre todo en el aspecto que contempla la justicia como la finalidad principal del desarrollo de la investigación penal.

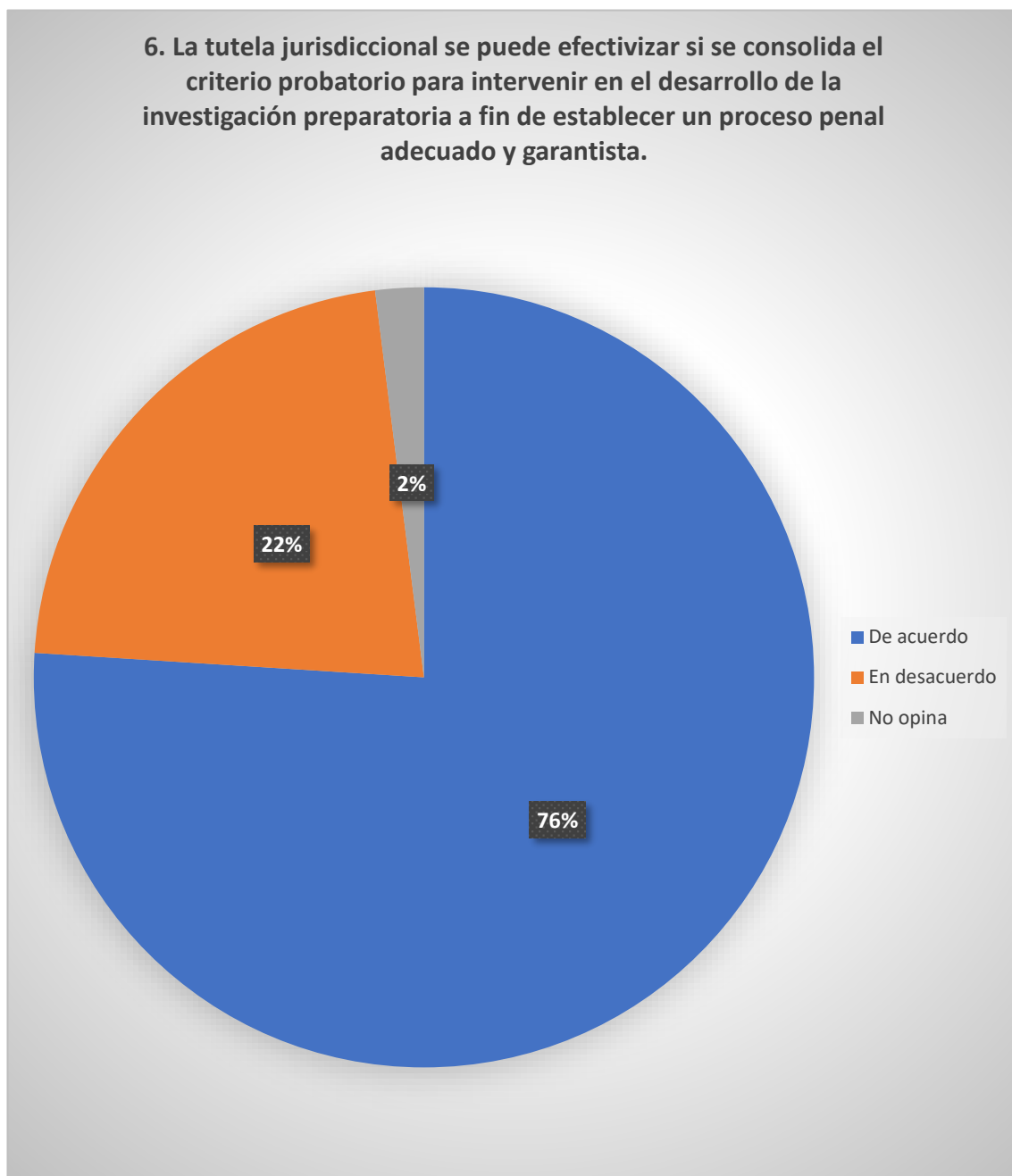
Esta condición debiera superar las posibilidades de que no se pueda acceder a la justicia mediante el proceso, por lo mismo que se entiende que las garantías operan en razón del acceso a la misma, puesto que una tutela efectiva no solo se muestra con el acceso al proceso, sino también con el control de las acciones que se realizan en el transcurso de la investigación.

Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 6”.

6. La tutela jurisdiccional se puede efectivizar si se consolida el criterio probatorio para intervenir en el desarrollo de la investigación preparatoria a fin de establecer un proceso penal adecuado y garantista.

Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	38
b. En desacuerdo	11
c. No opina	1
Total	50

Ilustración 6: “Gráfico porcentual de Tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los operadores jurídicos de los juzgados penales del distrito judicial de Lambayeque, obtenidos en base a la afirmación 5”.



Observación: de acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que existe un 76% de los operadores encuestados que manifiestan su conformidad con la propuesta planteada, así pues se da por sentado el hecho de que el criterio garantista del proceso penal es el generador de diversas circunstancias que permitan

acceder a la justicia en razón de la intervención de la tutela jurisdiccional, que en más que un principio, es una regla que propicia el adecuado desarrollo de la investigación.

Entre los aspectos más saltantes y que interesan a esta investigación se encuentra la estructura del proceso en el que se contemplan las fases que tienen características propias, pero que para el caso del carácter probatorio que se exige en cada una de ellas, se percibe un problema de similitud que no alcanza a un rango de prevalencia de la valoración, puesto que no propicia la certeza en el resultado de ella.

Por lo mismo que resulta apropiado establecer mecanismos de control que amparen el desarrollo de la fase de investigación preparatoria en la que se incorpore la exigencia de un estándar probatorio de valoración probatoria suficiente, esto conllevaría a la certeza respecto a la responsabilidad penal y con lo cual se construirá un adecuado criterio a plasmar en los fallos correspondientes.

Capítulo V

Contrastación de la hipótesis

El presente capítulo se enfoca en la síntesis de los resultados obtenidos a fin de poder establecer un ámbito de corroboración de lo que se ha planteado inicialmente para el desarrollo de la tesis; para tal finalidad se ha recurrido a la evaluación de los contenidos incorporados de acuerdo a lo establecido como metas de la investigación, esto es en función a los objetivos específicos, lo cual se ha discutido para obtener el criterio del investigador para que sobre ellas establecer validación sobre cada una de sus variables participantes en aquella postura que cuestiona el nivel probatorio en el proceso.

5.1. Discusión

Se discuten en esta parte, todos los contenidos desarrollados en los capítulos de la tesis, desarrollados de acuerdo a las indicaciones metodológicas que pautaron las metas, tomando en cuenta también los antecedentes o trabajos previos que determinan la percepción alcanzada por los investigadores previos y teniendo en cuenta la data establecida de manera previa a iniciar la tesis, para luego en función a la síntesis de dicha discusión se ha construido cada una de las posturas que asume el investigador como su propio planteamiento respecto a las metas específicas.

5.1.1. Sobre el contenido del objetivo: “Desarrollar teóricamente el principio de tutela jurisdiccional efectiva y su participación en el proceso penal”

Teniendo en cuenta que el enfoque de este objetivo se refiere a la descripción desde el punto de vista teórico, del principio de tutela jurisdiccional efectiva, ha de explicarse en un principio el sentido que orienta a este tipo de figuras jurídicas, así pues, su naturaleza implica una regla de optimización del derecho; esto es que el principio como tal se ocupará de dar la pauta general para que el derecho sea aplicado de manera correcta ante la presencia de una duda o falta de regulación legislativa.

En ese sentido el principio en sí busca generar una garantía, que absorbe a la peculiaridad abstracta de la seguridad jurídica que se supone debe otorgarse a través de la protección que debe dar el Estado frente a su actuación para el bienestar de los ciudadanos. Siendo así, la tutela jurisdiccional como principio tendrá ese mismo sentido, proteccionista, para orientar la atención que debe brindar la estructura estatal referida a la justicia, hacia la realización adecuada de ciertos actos de intervención.

De acuerdo a las indicaciones anteriores debe considerarse sobre la protección estatal la condición de efectiva respecto a la tutela jurisdiccional ¿se refiere al propio principio o se relaciona con la eficacia de su aplicación? Sobre este cuestionamiento se debe indicar que la descripción del principio hace presumir la relación directa con la ejecución de ciertos actos bajo determinadas circunstancias, como el cumplimiento de parámetros que permitan al ciudadano alcanzar el nivel de justicia deseado, tal es el caso del acceso a los sistemas jurisdiccionales a fin de que se le atienda de manera adecuada.

Precisamente sobre esta última condición referida a la atención adecuada, es que puede observarse el sentido de la nominación del principio, esto es que cuando señala sobre el término efectiva, se relaciona con la eficacia de su ejecución, para ello se precisa que el origen de la secuencia de eficacia o efectividad se torne hacia la estructura legislativa, puesto que en base al principio de legalidad, la ejecución de las acciones jurisdiccionales habrán de realizarse en función a dicha estructura.

Basándose en lo anterior, la determinación de la efectividad dependerá del como se han construido las reglas para el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en primer lugar, luego en un segundo momento de observación corresponde la verificación de la manera en que se ejecutan las acciones por parte de los operadores de justicia a fin de reconocer el criterio jurídico que asumen desde su punto de vista subjetivo.

Entonces, el nivel de eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva sólo podrá determinarse en función al establecimiento de una condición relacional que opera sobre la regla establecida y la ejecución de la misma basada en un criterio jurisdiccional, el resultado de optimización de ello, permitirá razonar sobre un alcance adecuado de la aplicación del principio.

Tal como se ha señalado, en la descripción general del principio de tutela jurisdiccional efectiva, tiene una aplicación genérica, lo cual resuelve la duda de si este ¿es un principio exclusivo del proceso penal?, lo cual a fin de aclarar de manera puntual, debe ceñirse a la indicación de que el proceso penal tiene como característica principal el hecho de ser garantista; ello obedece a la comprensión del

esquema jurídico penal dentro del ámbito de constitucionalización, esto es que se deberán respetar y garantizar la ejecución de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el desarrollo del proceso, lo cual implica una adecuada protección tanto del imputado cuanto de las partes que intervengan en la investigación penal.

¿cuán adecuada es la estructura del proceso penal para conseguir la efectividad de la tutela jurisdiccional?

Según la estructura del sistema de justicia generada mediante el ordenamiento penal peruano, se incorpora un espacio de atención hacia la manera en que se ejecutan los procedimientos para investigar aquella acción delictiva con el fin de alcanzar la determinación de responsabilidad penal que pudiera tener el imputado, esto es el proceso penal en sí. Dicha estructura jurídica se entiende basada en las garantías que se desprenden del ordenamiento constitucional; por lo tanto, su construcción debiera ser lo suficientemente adecuada para asegurar la ejecución de un proceso bajo el lineamiento de la tutela jurisdiccional efectiva.

En función a lo descrito respecto a lo que debe ser, la observación de este trabajo académico habrá de orientarse precisamente a la verificación de un aspecto específico, dado que no se puede hacer una generalización de la eficacia en función a todo el ordenamiento procesal penal, es por ello que se observa de manera puntual a una de las etapas del proceso como es el caso de la investigación preparatoria, puesto que se debe considerar como una de las principales fases del proceso, dados los controles que se ejecutan sobre el resultado de la misma y que determinan si la acusación se llega a establecer o no.

De acuerdo a lo señalado, la determinación del nivel de eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en base a la estructura legislativa que opera sobre la fase de investigación preparatoria, convierte a la regla procesal en un elemento de crítica, toda vez que habrán de observarse los parámetros establecidos sobre el aspecto más trascendental que tiene por finalidad el reconocimiento de los elementos puntuales que permitan construir una acusación formal respecto al imputado en función a su responsabilidad de las acciones delictivas que se investigan. Estos elementos legislativos deberán ser suficientes para que se logre tal finalidad y evitar la contradicción con otros principios.

De allí que, la observación de esta estructura legislativa se oriente básicamente a la determinación del criterio probatorio, puesto que los estándares de exigencia probatoria se presumen debe ser lo suficientemente convincente para que el criterio jurisdiccional adopte la perspectiva adecuada respecto a la acción delictiva que investiga. Siendo entonces que el nivel del criterio tendrá relación directa con una sospecha reveladora que permita el desarrollo de la fase de investigación preparatoria.

Dicha fase deberá contener en la estructura legislativa, lineamientos que permitan la ejecución correcta de los actos de investigación por parte del Ministerio Público, que vayan desde la indicación puntual de la ejecución diligente así como respecto del control de la propia acusación; siendo así, la determinación de eficacia dependerá de que el nivel del estándar probatorio que conlleva a la acusación sea lo suficientemente convincente para el desarrollo de una etapa intermedia conducente a la ejecución del juicio oral donde se valoran los medios probatorios que permitan motivar una decisión adecuada en la sentencia.

De acuerdo a la indicación anterior, el criterio probatorio tiene trascendencia directa sobre la garantía para acceder efectivamente a un sistema de justicia, ha de comprender un estándar probatorio el cual ejecuta el Estado, es lo suficientemente convincente y se construye con el apoyo de los principios generales del derecho penal y los específicos del proceso en sí, se tendrá como resultado el nivel de eficacia que se espera del proceso, lo cual implica que no tendrían que existir revisiones de este carácter probatorio.

TOMA DE POSTURA.

La tutela jurisdiccional efectiva, es uno de los principios primigenios que orienta al resto de figuras jurídicas, que se ocupará de dar la pauta general para que el derecho sea aplicado de manera correcta ante la presencia de una duda o falta de regulación legislativa, pues busca una garantía que logre la seguridad jurídica de protección que el Estado debe otorgar a los ciudadanos, como derecho fundamental de acceso a la jurisdicción que todo ciudadano debe exigir del órgano judicial, en tiempo razonable, el desarrollo completo de sus actividades, tanto decisorias, con emisión de un pronunciamiento procesal o de mérito sobre el objeto de la pretensión procesal, el que debe ser realizado efectivamente desde el punto de vista material.

Su efectividad dependerá del cómo se han construido las reglas para el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que incorpora la manera en que se ejecutan las acciones por parte de los operadores de justicia a fin de reconocer el criterio jurídico que asumen desde su punto de vista subjetivo.

El principio de tutela jurisdiccional efectiva tiene como característica principal el hecho de ser garantista; acorde con el esquema jurídico penal dentro de

los parámetros de la Constitución, esto es que se deberá respetar y garantizar la ejecución de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el desarrollo del proceso, lo cual implica una adecuada protección tanto del imputado cuanto de las partes que intervengan en la investigación penal.

En la investigación preparatoria, se debe considerar como una de las principales fases del proceso, dados los controles que se ejecutan sobre el resultado de la misma y que determinan si la acusación se llega a establecer o no; se aprecia a la regla procesal como un elemento de crítica, toda vez que habrán de observarse los parámetros establecidos sobre el aspecto más trascendental que tiene por finalidad el reconocimiento de los elementos puntuales que permitan construir una acusación formal respecto al imputado en función a su responsabilidad de las acciones delictivas que se investigan. Estos elementos legislativos deberán ser suficientes para que se logre tal finalidad y evitar la contradicción con otros principios.

El criterio probatorio tiene trascendencia directa respecto de la protección sobre el acceso efectivo hacia un sistema de justicia, puesto que, si es lo suficientemente convincente y se construye con el apoyo de los principios generales del derecho penal y los específicos del proceso en sí, se tendrá como resultado el nivel de eficacia que se espera del proceso, lo cual implica que no tendrían que existir revisiones de este carácter probatorio.

5.1.2. Sobre el contenido del objetivo: “Estudiar la estructura del tratamiento de la prueba en el proceso penal”

¿cuál es la naturaleza jurídica de la prueba?

De acuerdo al sentido de esta meta de la investigación se precisa que la prueba tenga una definición que permita responder a la pregunta ¿Qué es la prueba?, ante ello se debe señalar que la estructura normativa no la indica de manera puntual; sin embargo, en la doctrina se ubica una secuencia de características que permiten identificar su concepto, puesto que integra las funciones que desempeña en el desarrollo de la investigación o el reconocimiento de los derechos, desde luego ello visto de la perspectiva general ya que opera en los diferentes rubros de acción del derecho, civil, penal, administrativo y demás.

Lo que interesa acotar es que se trata de aquella figura jurídica o herramienta que proporciona una condición de utilidad orientada a lograr una connotación de verdades o el alcance de la certeza respecto a algunas circunstancias de la realidad, como es el caso de la intervención en el derecho civil para el reconocimiento de ciertos derechos y otorgárselo a quien corresponda, siendo la acción punitiva del Estado trasladada a la investigación penal, se precisa de ella, la prueba, para el reconocimiento incriminatorio de un determinado sujeto sobre la acción que se ha establecido como delictiva, puesto que atenta contra la estructura del ordenamiento jurídico.

La certeza de la que se habla puede orientarse en función a las pautas establecidas como la verdad en función a determinada regulación que puede ser normativa e incluso científica, pero además se ha de tener en cuenta que bien puede

alcanzarse tal certeza en razón de la aplicación de reglas lógicas que usará el responsable de la investigación o del magistrado que determinará el fallo decisorio, puesto que ellos en tanto operadores de justicia, podrán hacer uso de la máxima de la experiencia para alcanzar el nivel de certeza en tanto la evaluación de la prueba en el proceso.

Luego de haber establecido lineamientos que determinan el concepto de la prueba, se debe incursionar en la observación de las funciones que desempeña esta figura jurídica, así pues se debe acudir a la interrogante ¿qué papel representa la prueba en el proceso?, partiendo de su intervención como un elemento determinante para advertir el nivel de responsabilidad que tiene el imputado, se puede indicar que la función de la prueba es el apuntalamiento de la convicción, en base a establecer verdades en función a su influencia en el criterio del operador jurídico.

La función explicada debe tener una estrecha relación con el principio de legalidad, en cuanto a lo que se comprende como la identificación de elementos normativos que orienten, en tanto reglas, a la convicción del juzgador a fin de establecer una línea de verdad, que se convierte en la teoría del caso, lo cual debe darse con la concurrencia del carácter material u objetivo, que le otorga el carácter de credibilidad en función a los elementos legales con los que se cuenta en el ámbito jurídico, lo cual se refleja en los argumentos que sirven de motivación para las decisiones, sea el caso específico de la resolución que admite los requisitos de la acusación a fin de continuar con el proceso.

Vista la secuencia de características que opera sobre la prueba, debe tenerse en cuenta el hecho de que la verificación de su eficacia dependerá de la

existencia de efectos reconocibles dada su participación en el proceso penal, para ello debe contestarse la siguiente pregunta ¿Qué efecto produce la participación de la prueba en el proceso?

Sobre ello se debe indicar que el principal efecto de la prueba es la generación de certeza respecto a los elementos que participan en el desarrollo de la investigación, lo cual deberá darse bajo un criterio de seguridad jurídica, esto es que tenga la característica de fiabilidad en tanto a lo que corresponde como garantía de efectividad sobre la justicia, lineamiento presente sobre su participación durante el proceso penal, podrá indicarse como la acción probatoria dotada de eficacia.

¿Qué característica especial se puede reconocer de la prueba que participa en el proceso penal?

De la observación del proceso y la intervención de la prueba para el caso del ámbito penal, se puede indicar que existe una característica principal que es el carácter probatorio el cual se entiende relacionado con la función de la pena en el proceso penal, puesto que su aplicación orientada a la resocialización del agente dependerá de la existencia previa de una convicción sobre la responsabilidad penal. En ese sentido, lo que interesa comprender es que la participación de la prueba tiene un sentido estricto de verificación de la responsabilidad que permitirá la imputación de un delito con lo cual se apertura la facultad del ius puniendi del Estado para aplicar una sanción.

¿Cuáles son los criterios jurisdiccionales que se adoptan en el proceso penal para el tratamiento de la prueba?

De acuerdo a la forma en que se ha diseñado el proceso penal, puede advertirse que existen dos maneras de establecer el nivel de responsabilidad a través de la prueba, ello bajo el entendido caso de que el juzgador ha de evaluar la situación jurídica del imputado, en tanto que el reconocimiento de la responsabilidad será lo que promueva la imputación de la acción delictiva y luego en función a ello la aplicación de una sanción.

Para tales efectos, la acción jurisdiccional se promueve en dos ámbitos permisibles el primero que se relaciona de manera directa con el principio de legalidad, puesto que el magistrado habrá de recurrir a un criterio normativo para la evaluación de la responsabilidad, por lo mismo que relaciona la prueba con la estructura normativa, que para el caso penal interviene la tipificación de las acciones delictivas.

De otro lado se tiene también el hecho de que las acciones jurisdiccionales pueden tomar la perspectiva subjetiva para evaluar la condición jurídica del imputado, puesto que le es permitido al juzgador apartarse de la forma en que se ha prescrito la regla en tanto que no la encuentre suficiente para poder resolver el caso en tanto a la responsabilidad del agente, por lo mismo que podrá orientar su criterio jurídico para evaluar la prueba en base a su propia convicción basada en el ordenamiento constitucional.

¿qué relación existe entre el garantismo penal y el tratamiento de la prueba en el proceso penal?

Se trata de una relación de vinculación directa, siendo así su tratamiento probatorio esta contemplado bajo el lineamiento de las acciones de control estatal

basadas en el garantismo que caracteriza a la estructura normativa penal. Tal condición opera como un mecanismo de control respecto de la forma en que se adoptan los criterios jurídicos que determinan la responsabilidad, por lo mismo que la operatividad de la prueba depende de la sujeción a dichas garantías.

TOMA DE POSTURA:

Según los criterios adoptados mediante esta discusión se pudo establecer que la estructura del tratamiento de los medios probatorios durante un proceso de investigación se vincula con una condición de control sobre la actividad jurisdiccional que se ocupa de la determinación de la responsabilidad penal, bajo criterios tanto objetivos cuanto subjetivos, los mismos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del proceso penal bajo un criterio de garantismo, lo cual se asegura con los estándares que le asisten a nivel del razonamiento jurisdiccional. Esta condición se advierte con cierto rezago en la diferenciación de las etapas del proceso penal, como es el caso del estándar probatorio que corresponde en la fase preparatoria que incorpora el proceso penal con relación a la subsiguiente etapa.

5.1.3. Sobre el contenido del objetivo: “Analizar el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria para contrastar con el principio de tutela jurisdiccional efectiva”

En cuanto a lo que concierne al criterio probatorio, se debe indicar que esta en función directa con la adopción del razonamiento que ejecuta el juzgador que evalúa cada una de las fases, según corresponda, dentro del proceso penal, así pues interesa saber que “el estándar de prueba se inserta en una valoración racional,

donde al ser valorado de manera conjunta se presenta como suficiente para declarar un hecho por probado. Ello implica el hecho de que se deban establecer parámetros como el hecho de comprenderlos como el umbral a partir del cual se acepta una hipótesis como probada.

Ante ello se indica también que tal razonamiento opera sobre el sentido de la valoración probatoria debido al carácter subjetivo que pueda llegar a establecerse de parte de quien valora en el proceso, es preciso por ello admitir que el cumplir con los estándares no asegura que pueda existir la posibilidad de accionar erróneamente en el instante de la valoración probatoria. Siempre habrá un espacio mínimo de la falta de certeza que también alcanza al sentido de un estándar adecuado para la valoración de la prueba, como es el caso de que se llegue a una absolución sin fundamento o fuera de lugar.

Es importante considerar también los aspectos negativos que trae como consecuencia la ausencia de un criterio de valoración adecuada, así pues se precisa que en la revisión de los procesos en la judicatura en cuanto a lo que se refiere a las acciones procesales en la fase de investigación preparatoria, debe considerarse que los yerros a esta altura de la investigación trae como consecuencia afectación de derechos fundamentales pues debe asumirse el costo de las condenas erróneas, lo cual sin duda alguna resulta ser más elevado que el de un fallo que absuelve de manera equivocada, es por ello que se justifica que el estándar probatorio debe ser lo suficientemente exigente y exigible para el desarrollo de la valoración en la etapa de investigación preparatoria.

Como se sabe de acuerdo al artículo 336 del Código Procesal penal se advierte que ante la existencia de pruebas o indicios suficientes se procederá a formalizar la investigación preparatoria, para lo cual se exige que el estándar de prueba que se utilice sea de la “sospecha reveladora”, esto es lo que da origen a la formalización de la investigación.

Como se puede apreciar se ubica esta descripción en un grado medianamente aceptable de la sospecha para alcanzar el nivel de reveladora a fin de que se formalice la investigación preparatoria, para ello se precisa de que existan “hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta delictiva, mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación. En este caso los elementos de convicción han de ser racionales, descartándose las vagas indicaciones o livianas sospechas, de tal forma que la formalización de la investigación preparatoria debe apoyarse en datos de valor fáctico que impliquen más que una posibilidad y menos que una certeza, es decir plica la probabilidad de la existencia de un delito”.

En razón a lo descrito se ha verificado la acción jurisdiccional que la presencia de los estándares probatorios no es lo suficiente satisfactoria para cumplir el requisito de convicción de parte de quien evalúa el valor probatorio, esto es que el razonamiento que se aplica en la realidad no muestra la secuencia inferencial que supone la verificación de las hipótesis planteadas respecto a la responsabilidad del imputado, así pues resulta necesaria la implementación de la exigencia de este cumplimiento.

TOMA DE POSTURA

En atención a lo observado en el desarrollo jurisdiccional se advierte la ausencia de estándares probatorios adecuados que permitan corroborar el planteamiento hipotético de la responsabilidad penal del imputado en la fase de investigación preparatoria, por lo mismo que se aprecia la falta de probabilidad reveladora de la sospecha respecto a la existencia del delito; siendo ello así no es posible contrastar con la eficacia de la finalidad del principio de tutela jurisdiccional que le corresponde al proceso penal garantizar en esta fase.

5.2. La Validación de las variables

5.2.1. Sobre la variable independiente: “El criterio probatorio en la investigación preparatoria”

De acuerdo a lo desarrollado en la discusión se puede establecer que la estructura del tratamiento de los medios probatorios que participan de un proceso, tiene condición de control sobre la actividad jurisdiccional que se ocupa de la determinación de la responsabilidad penal, bajo criterios tanto objetivos cuanto subjetivos, los mismos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del proceso penal bajo un criterio de garantismo, lo cual se asegura con los estándares que le asisten a nivel del razonamiento jurisdiccional. Esta condición se advierte con cierto rezago en la diferenciación de las etapas del proceso penal, como es el caso del estándar probatorio que corresponde sobre la fase preparatoria de la acción penal con relación sobre una subsiguiente etapa. En tal sentido se puede decir que la variable independiente queda validada en su contenido de la manera siguiente:

El criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza determinación en base a un estándar probatorio suficiente.

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal”

La tutela jurisdiccional efectiva, es uno de los principios primigenios que orienta al resto de figuras jurídicas, que se ocupará de dar la pauta general para que el derecho sea aplicado de manera correcta ante la presencia de una duda o falta de regulación legislativa, pues busca una garantía que logre la seguridad jurídica de

protección que el Estado debe otorgar a los ciudadanos, como derecho fundamental de acceso a la jurisdicción que todo ciudadano debe exigir del órgano judicial, en tiempo razonable, el desarrollo completo de sus actividades, tanto decisorias, con emisión de un pronunciamiento procesal o de mérito sobre el objeto de la pretensión procesal, el que debe ser realizado efectivamente desde el punto de vista material.

Su efectividad dependerá del cómo se han construido las reglas para el ejercicio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que incorpora la manera en que se ejecutan las acciones por parte de los operadores de justicia a fin de reconocer el criterio jurídico que asumen desde su punto de vista subjetivo.

El principio de tutela jurisdiccional efectiva tiene como característica principal el hecho de ser garantista; acorde con el esquema jurídico penal dentro de los parámetros de la Constitución, esto es que se deberá respetar y garantizar la ejecución de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el desarrollo del proceso, lo cual implica una adecuada protección tanto del imputado cuanto de las partes que intervengan en la investigación penal.

En la investigación preparatoria, se debe considerar como una de las principales fases del proceso, dados los controles que se ejecutan sobre el resultado de la misma y que determinan si la acusación se llega a establecer o no; se aprecia a la regla procesal como un elemento de crítica, toda vez que habrán de observarse los parámetros establecidos sobre el aspecto más trascendental que tiene por

finalidad el reconocimiento de los elementos puntuales que permitan construir una acusación formal respecto al imputado en función a su responsabilidad de las acciones delictivas que se investigan. Estos elementos legislativos deberán ser suficientes para que se logre tal finalidad y evitar la contradicción con otros principios.

El criterio probatorio tiene trascendencia directa respecto al principio que asegura el acceso con efectividad a un sistema de justicia idóneo, en tanto, si es lo suficientemente convincente y se construye con el apoyo de los principios generales del derecho penal y los específicos del proceso en sí, se tendrá como resultado el nivel de eficacia que se espera del proceso, lo cual implica que no tendrían que existir revisiones de este carácter probatorio.

En atención a lo observado en el desarrollo jurisdiccional se advierte la ausencia de estándares probatorios adecuados que permitan corroborar el planteamiento hipotético de la responsabilidad penal del imputado en la fase de investigación preparatoria, por lo mismo que se aprecia la falta de probabilidad reveladora de la sospecha respecto a la existencia del delito; siendo ello así no es posible contrastar con la eficacia de la finalidad del principio de tutela jurisdiccional que le corresponde al proceso penal garantizar en esta fase. De acuerdo a ello se ha llegado a determinar sobre tal variable dependiente resulta ser validada en función a lo que se muestra a continuación:

La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

5.3. La contrastación de la hipótesis

En base a todas las síntesis antes desarrolladas, se pudo alcanzar como determinación final para este trabajo académico, esto en función al vínculo reconocido como existente entre dos inferencias que fueron obtenidas de la síntesis de las posturas que validan cada variable, lo cual es mostrado a continuación.

Determinación final de la tesis:

El criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza determinación en base a un estándar probatorio suficiente; por lo tanto, la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

La hipótesis inicial	La determinación final
Si, se verifica que el criterio probatorio en la investigación preparatoria es inadecuado; entonces, ello está vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.	El criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza determinación en base a un estándar probatorio suficiente; por lo tanto, la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

¿En que aspectos se logra corroborar el planteamiento de la hipótesis inicial y en cuales se niega la determinación?

Se logra corroborar:

En la verificación de las nulidades a nivel casatorio respecto a la determinación de razón a los elementos de convicción, que se entiende que son generados en base a pruebas valoradas devienen su nulidad por decisión del poder judicial circunstancia que permite advertir un problema de criterio de aplicación en las reglas procesales al tratamiento de la prueba a nivel de la investigación preparatoria, dando como respuesta que se está vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

Este criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza la determinación en base a un estándar probatorio suficiente, por lo que la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

¿Qué alcances muestra la determinación de la tesis en función al objetivo general?

En función a la tesis presentada el objetivo general se demuestra determinando si el criterio probatorio desarrollado en la investigación preparatoria resulta jurídicamente apropiado para asegurar la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

Asimismo realizando una investigación exhaustiva de la cantidad de casos apelados en los juzgados penales en la ciudad de Chiclayo que son 370 según el análisis estadístico la acción de la judicatura debe adoptar un carácter razonable para la verificación del nivel de probanza a fin de que no se observen circunstancias de revisión de los fallos en función a falencias o subjetividad al momento de la

evaluación de la objetividad probatoria que ha de basarse en la construcción de las reglas y la objetividad de su aplicación.

¿Cómo se materializa la solución al problema que identifica la determinación final?

El criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza la determinación en base a un estándar probatorio suficiente; por lo tanto, la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

En función a lo descrito respecto a lo que debe ser, esta tesis se encuentra orientado precisamente a la verificación de un aspecto específico, enfocándose en la etapa **investigación preparatoria**;

Por lo tanto, la determinación del nivel de eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva en base a la estructura legislativa opera en el reconocimiento de los elementos puntuales que permitan construir una acusación formal respecto al imputado en función a su responsabilidad de las acciones delictivas que se investigan. Estos elementos legislativos deberán ser suficientes para que se logre tal finalidad y evitar la contradicción con otros principios;

Conclusiones

Conclusión general:

El criterio probatorio en la investigación preparatoria no alcanza determinación en base a un estándar probatorio suficiente; por lo tanto, la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal no es suficientemente eficaz en la investigación preparatoria.

Conclusiones específicas:

Primera:

Se ha llegado a concluir sobre la tutela jurisdiccional efectiva en relación a su participación en el proceso penal que, se constituye como garantía de seguridad jurídica, como derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tal característica garantista; implica una adecuada protección tanto del imputado y que tiene por finalidad el reconocimiento de los elementos puntuales que permitan construir una acusación formal acorde a su responsabilidad.

El criterio probatorio tiene trascendencia directa sobre la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, puesto que, si es lo suficientemente convincente y se construye con el apoyo de los principios generales del derecho penal y los específicos del proceso en sí, se tendrá como resultado el nivel de eficacia que se espera del proceso, lo cual implica que no tendrían que existir revisiones de este carácter probatorio.

Segunda:

Se llega a establecer de acuerdo al estudio de la estructura del aprueba en el proceso penal que, está orientada a una condición de control sobre la actividad jurisdiccional que se ocupa de la determinación de la responsabilidad penal, bajo criterios tanto objetivo cuanto subjetivos, los mismos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del proceso penal bajo un criterio de garantismo, lo cual se asegura con los estándares que le asisten a nivel del razonamiento jurisdiccional. Esta condición se advierte con cierto rezago en la diferenciación de las etapas del proceso penal, como es el caso del estándar probatorio que corresponde a la etapa de investigación preparatoria con relación a la subsiguiente.

Tercera:

Se llega a la conclusión de que en atención a lo observado en el desarrollo jurisdiccional existe ausencia de estándares probatorios adecuados que permitan corroborar el planteamiento hipotético de la responsabilidad penal del imputado en la fase de investigación preparatoria, por lo mismo que se aprecia la falta de probabilidad reveladora de la sospecha respecto a la existencia del delito; siendo ello así no es posible contrastar con la eficacia de la finalidad del principio de tutela jurisdiccional que le corresponde al proceso penal garantizar en esta fase.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda mayor atención al manejo de los parámetros de corroboración en lo que corresponde al control de parte de los consejos ejecutivos del sistema de justicia a fin de alcanzar el objetivo de estandarización de criterios en pos de la seguridad jurídica que supone el proceso de investigación penal.

Segunda:

Se sugiere, a efectos de viabilizar el control ejecutivo de la adopción de criterios jurisdiccionales, se establezcan parámetros estandarizados mediante un acuerdo jurisdiccional que condicione el criterio de evaluación de los medios probatorios mediante estándares viables, los que deben incorporar la siguiente secuencia: fase de corroboración, estándar probatorio de probabilidad reveladora y estándar probatorio de probabilidad suficiente; elementos que permitirán la adquisición de un criterio de corroboración suficiente y confiable para motivar la decisión de iniciar la fase correspondiente en la investigación.

Bibliografía

- Alfaro Valverde, L. (2016). La motivación y la prueba de oficio: racionalidad de la iniciativa probatoria del juez. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, 6(1), 58-92. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de <https://lpderecho.pe/sistemas-valoracion-la-prueba-penal/>
- Almanza Altamarino , F., Flores, N., Paúcar Chapa, J. A., Portugal Sánchez, M., & J. C. (2007). La prueba en el proceso penal peruano. *Universidad San Martín De Porres*, 2-137. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de https://derecho.usmp.edu.pe/instituto/articulos/2017/proceso_penal.pdf
- Araújo Oñate, R. (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la jsuticia administrativa. Visión de derecho comparado. *Redalyc*, 13(1), 247-291. Recuperado el 02 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/733/73318918009.pdf>
- Calsin Coila, H. J. (2015). Prueba indiciaria en la investigación preliminar y su implicancia en el archivamiento de las denuncias penales. *Dialnet*, 125-131. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5157126.pdf>
- Córdova Pardo, V. E. (2020). Análisis de la actividad probatoria de oficio en el proceso penal: a proposito de imparcialidad judicial. *Universidad DE Piura*, 3-68. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/4319/DER_161.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De Olivera , C. A. (2009). El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde la perspectiva de los derechos fundamentales. *Scielo*(1), 185-201. Recuperado el 02 de Junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502009000100009

Espinoza Ariza, J. (2019). El estándar de prueba en el proceso penal peruano. *Revista Lex*, 2313-1861. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/1812/1948>

Hunter Ampuero, I. (2011). La iniciativa probatoria del juez y la igualdad de armas en el proyecto de código procesal civil. *Scielo*(2), 53-76. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004

Lorca Navarrete, A. M. (2003). El Derecho Procesal como sistema de garantías. *Scielo*, 531-557. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332003000200004

Martín Diz, F. (2014). Del derecho a la tutela judicial efectiva hacia el derecho a una tutela efectiva de justicia. *Dialnet*, 161-176. Recuperado el 02 de Junio de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4945876.pdf>

Meneses Pacheco, C. (2014). Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso civil. *Scielo*(2), 43-86. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200003

Oré Guardia, A., & Loza Avalos, G. (2005). La estructura del Proceso Común en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano. *Derecho Y Sociedad*, 163-177. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/17025/17323/>

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Mothpol*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Ramírez Carvajal, D. M. (2017). Tutela jurídica efectiva: El reto de la justicia de pequeñas causas. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, 7(1), 15-44. Recuperado el 02 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/19176>

Ramírez, D. M. (2017). Tutela jurídica efectiva: El reto de la justicia de pequeñas causas. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, 7(1), 15-44. Recuperado el 02 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/view/19176>

Reyes Molina, S. (2012). Presunción de inocencia y estándar de prueba en el proceso penal: Reflexiones sobre en caso chileno. *Scielo*, XXV(2), 229-247. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502012000200010

- San Martín Castro, C. E. (2007). Acerca de la función del juez en la investigación preparatoria. *Redalyc*(4), 81-112. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de <http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539904005.pdf>
- Soledad Márquez, A. (2015). Prueba y valoración de la prueba por el Tribunal Fiscal de la Argentina. *Scielo*(39), 119-144. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652015000200006
- Toscano López , F. H. (2013). Aproximación conceptual al "acceso efectivo a la administración de justicia" a partir de la teoría de la acción procesal. *Redalyc*(24), 237-257. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/4175/417537442010.pdf>
- Ulate Chacón , E. (2007). Derecho a la tutela judicial efectiva: Medidas cautelares en el ámbito constitucional, comunitario e internacional. *Revista de Ciencias Jurídicas*, 141-174. Recuperado el 03 de Junio de 2020, de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/13628/12940>
- Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México: McGraw_Hill.
- Yáñez Meza, D. A., & Castellano Castellanos, J. A. (2016). El derecho a la prueba en Colombia: aspectos favorables y críticos de la reforma del código general del proceso en el derecho sustancial y procesal. *Redalyc*, 561-610. Recuperado el 04 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/825/82546585015.pdf>

Ynga Masilla, Á. M. (2015). La tutela de derechos y la vulneración de los derechos fundamentales en el Distrito Judicial de Loreto. *Revista UAP*, 257-282.
Recuperado el 03 de Junio de 2020, de
<http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/724/838>

Anexos N° 1.

Anexo 1: Formulario de encuesta para la opinión de los operadores jurídicos.

Tesis

“El criterio probatorio en la investigación preparatoria frente a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal”

Se presenta este formulario de encuesta a fin de reconocer la postura de los operadores jurídicos respecto al planteamiento de la investigación referida a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, a fin de validar las posturas de la investigación.

I. Variable independiente: El criterio probatorio en la investigación preparatoria

1. El criterio probatorio es el resultado la acumulación de elementos subjetivos que se aplican sobre de la objetividad de la norma para la evaluación de las pruebas.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina
2. La ausencia de un criterio probatorio idóneo por parte de los magistrados estaría atacando la condición garantista del proceso penal, en razón de sus efectos sobre las etapas posteriores.
 - a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

3. La efectividad del carácter probatorio en la investigación preparatoria debe ser asumida bajo un criterio de control a nivel jurisdiccional permitiendo la ejecución de la garantía probatoria.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

II. Variable dependiente: La tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal.

4. La tutela jurisdiccional se considera como el génesis de la acción de justicia, mediante el acceso y el correcto desarrollo que para el proceso penal se estructura en diferentes etapas.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina

5. El desarrollo del proceso penal requiere de la intervención de diversas garantías, siendo la tutela jurisdiccional el primer nivel de acceso al sistema de justicia, el cual solo resulta efectivo si propicia un acceso adecuado.

a. De acuerdo

- b. En desacuerdo
 - c. No opina
6. La tutela jurisdiccional se puede efectivizar si se consolida el criterio probatorio para intervenir en el desarrollo de la investigación preparatoria a fin de establecer un proceso penal adecuado y garantista.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina

Link del formulario de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthmRU7OIana2YzXW-89NUOVeUpCT-TVW7J7FFQhCfKm4iWQ/viewform?usp=sf_link

*Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

Chosica, 30 de julio de 2021

OFICIO N° 01-2021 – UNPRG-S.A.C.G.

**Dra.
PAOLA NAVARRO BENITES
JEFA DE ASUNTOS JUDICIALES LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LAMBAYEQUE.
Presente. –**

ASUNTO: REQUIERE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DE TESIS DE PRE- GRADO.

Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de saludarla y a su vez solicitarle información en merito al desarrollo de mi tesis de Pre- Grado, sobre lo siguiente:

- ✓ La Cantidad de Casos Ingresados a Los Juzgados Penales de la Ciudad de Chiclayo.
- ✓ La Cantidad de Casos Apelados en los Juzgados Penales en la Ciudad de Chiclayo.
- ✓ Veinte (20), Resoluciones de Formalización de Investigación que se llevan en los Juzgados de Investigación Preparatoria.

Cabe precisar que lo que se solicita se requiere para temas académicos, debido a que el suscrito es Bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque; asimismo consigno mi correo electrónico saulcarlogonz22@gmail.com y numero de celular 957339539, a efectos de coordinación sobre la información solicita.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,


SAUL ALBERTO CARLOS GONZALES
DNI: 47015692



Navarro Benites Paola <pnavarro@pj.gob.pe>

REQUIERE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DE TESIS DE PRE- GRADO

Lady Milagros Cubas Barboza <lcubasb@pj.gob.pe>

13 de agosto de 2021, 8:52

Para: Navarro Benites Paola <pnavarro@pj.gob.pe>, Farronnan Ojeda Nancy <nfarronnan@pj.gob.pe>

Dra. Paola Navarro Benites

Buenos días es grato dirigirme a usted, por encargo de la Dra. Patricia Cueva Samper, se le remite la información solicita acerca de: La Cantidad de Casos Ingresados a Los Juzgados Penales de la Ciudad de Chiclayo, en el periodo del 2015 hasta el 2021, tipo de delito de homicidio calificado.

Ingresos en los Juzgados Penales de Chiclayo de la CSJLA, en forma global, ya que el delito está codificado.
- Elevaciones de expedientes en los Juzgados Penales de Chiclayo de la CSJLA, en forma global, no indica el delito.

Cumplimos con remitir la información para los fines pertinentes.

2 adjuntos **apelaciones Jup Jlp 2015-2021.xlsx**
40K **Ingresos Jup Jlp 2015-2021.xlsx**
10820K



Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
Gerencia de Administración Distrital
Unidad de Servicios Judiciales

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Chiclayo, 25 de Agosto del 2021

CARTA N° 000047-2021-USJ-GAD-CSJLA-PJ



Firmado digitalmente por NAVARRO
BENITES Paola FAU 201259951216
Jefa De Unidad De Servicios
Judiciales Coja
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.08.2021 08:10:02 -05:00

Señor
CARLOS GONZALES SAUL ALBERTO - DNI: 47015692
Presente.-

Asunto : Remito respuesta a solicitud de acceso a la información pública.

Referencia : EXPEDIENTE 000779-2021-USJ-GA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mérito al asunto de la referencia y en virtud de la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, brindo respuesta a su solicitud referida a la información en materia Penal. Se adjuntan dos reportes y el correo remitido por la Administración del Nuevo Código Procesal Penal.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

PAOLA NAVARRO BENITES

Jefe de Unidad de Servicios Judiciales CSJLA
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

PNB/info



Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: <https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd> CÓDIGO: 193414 CLAVE: LSCNQC
CARTA N° 000047-2021-USJ-GAD-CSJLA Página 1 de 1





UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 11-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Saúl Alberto Carlos Gonzales**.

Siendo las 17:00 p.m del día viernes 17 de febrero del 2023 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**EL CRITERIO PROBATORIO EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FRENTE A LA GARANTÍA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO PENAL**", designados por Decreto N° 023-2020-UI-FDCP-UNPRG de fecha 12 de marzo del 2020, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**.

SECRETARIO : Mag. **MARY ISABEL COLINA MORENO**.

VOCAL : Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**

La tesis fue asesorada por Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ, nombrada por Decreto N°023-2020-UI-FDCP-UNPRG de fecha 12 de marzo del 2020.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°009-2023-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 31 de enero del 2023.

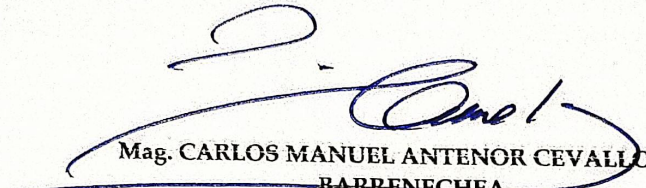
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Saúl Alberto Carlos Gonzales** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 16 (Dieciséis) en la escala vigesimal, mención de BUENO. Por lo que queda APTO** para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 18:07 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: https://drive.google.com/file/d/15d3NYjH93bAy3o_KhTi2XP56iOTIhd9b/view?usp=share_link

Lambayeque, viernes 17 de febrero del 2023


Abog. **CARLOS MANUEL MARTINEZ OBLITAS**
Presidente del Jurado


Mag. **MARY ISABEL COLINA MORENO**
Secretario del Jurado


Mag. **CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA**
Vocal del jurado

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 11-2023-UI-FDCP correspondiente a Saúl Alberto Carlos Gonzales, evento que se ha realizado de manera virtual el día viernes 17 de febrero del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 17 de mayo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA



Dr. Rafael Hernández Canelo
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ, Asesor de Tesis de Bach. Saúl Alberto Carlos Gonzales, titulada ***“EL CRITERIO PROBATORIO EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA FRENTE A LA GARANTÍA DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA EN EL PROCESO PENAL”***, luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud de 17%(DIECISIETE %) verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 07 de diciembre del 2022



Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ
D.N.I. 06015835
ASESOR

El criterio probatorio en la investigación preparatoria frente a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva en el proceso penal

INFORME DE ORIGINALIDAD

17 %

INDICE DE SIMILITUD

17 %

FUENTES DE INTERNET

2 %

PUBLICACIONES

7 %

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

2 %

2

hdl.handle.net

Fuente de Internet

2 %

3

docs.google.com

Fuente de Internet

1 %

4

repositorio.undac.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

5

idoc.pub

Fuente de Internet

1 %

6

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

7

revistas.uap.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

8

revistas.juridicas.unam.mx

Fuente de Internet

1 %

Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ

D.N.I. 06015835

ASESOR

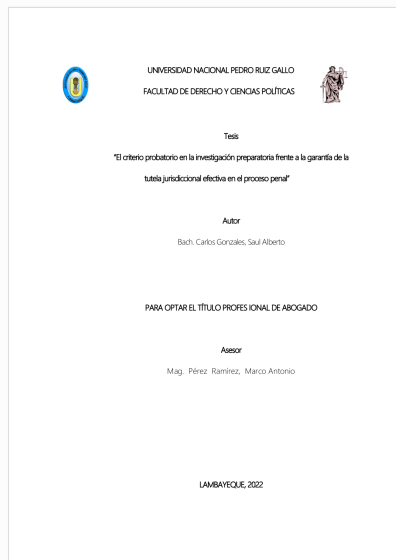


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Saul Alberto Carlos Gonzales
Título del ejercicio: REVISION DE TESIS
Título de la entrega: El criterio probatorio en la investigación preparatoria frente ...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_CARLOS_GONZALES_SAUL_ALBERTO.docx
Tamaño del archivo: 571.22K
Total páginas: 102
Total de palabras: 17,755
Total de caracteres: 96,075
Fecha de entrega: 07-dic.-2022 10:20a. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1974283938



Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mag. MARCO ANTONIO PEREZ RAMIREZ
D.N.I. 06015835
ASESOR